

ATENCION CONSULTAS
ESTA PUBLICACION CONTIENE, ADemás,
LAS REUNIONES 31ª Y 32ª

Cotro Argentino Sic. N° 1B)	FRANQUEO A PAGAR
	Cuenta N° 420
	TARIFA REDUCIDA
	Concesión N° 3146

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

30ª REUNION — 9ª SESION EXTRAORDINARIA — 6/7 DE ABRIL DE 1988

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDISON OTERO**;
del señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
doctor **ADOLFO GASS**,
y del señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia,
señor **LUIS RUBEO**

Secretarios: doctores **ANTONIO J. MACRIS** y **LEONARDO JUSTO PALOMEQUE**

Prosecretarios: doctor **ALBERTO J. B. IRIBARNE** y señor **DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN**

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Ramón
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
FALSONE, José A.
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JUAREZ, Carlos Arturo
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTIARENA, José H.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle

RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SALIM, Luis
SANCHEZ, Libardo N.
SOLARI YRICOYEN, Hipólito
TENEV, Carlos
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.

AUSENTES, EN COMISION:

BRASESCO, Luis A. J.
GROSSO, Edgardo Roger M.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
LEÓN, Luis A.
MURGUÍA, Edgardo P. V.
SOLANA, Jorge D.

AUSENTES CON AVISO:

DEL VILLAR, Manuel
GENOUD, José
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
SAADI, Ramón Eduardo
SAPAG, Elías

política de privatizaciones del Ministerio a su cargo y, a su vez, requerirle informes acerca del plan de emergencia por inundaciones, en una sesión pública especial al efecto, fijada para el próximo jueves 14, a las 10. Se aprueba. (Pág. 2928.)

9. A pedido del señor senador Menem se resuelve girar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con recomendación de pronto despacho, el proyecto de ley del que es autor junto con el señor senador Sánchez por el que se modifica la ley 23.548, de coparticipación federal. (S.-105-603/88.) (Pág. 2931.)
10. A moción del señor senador Falsone se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de declaración del que es autor por el que se repudia la actual campaña de intimidación pública en contra del sistema democrático. (S.-105-614/88.) (Pág. 2931.)
11. A moción del señor senador Rodríguez Saá se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del que es autor, junto con otros señores senadores, por el que se crea una comisión técnica jurídica para asesorar a la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de unificación civil y comercial. (S.-105-617/88.) (Pág. 2935.)
12. Moción de preferencia formulada por la señora senadora Gurdulich de Correa para considerar en la primera sesión en que se encuentre presente el señor presidente de la Comisión de Familia y Minoridad un pedido de informes relacionado con el Instituto Manuel Rocca y el sistema de minoridad. Se aprueba. (Pág. 2935.)
13. A moción del señor senador Rodríguez Saá se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución unificado por el que se invita al señor ministro de Educación al Honorable Senado a efectos de que informe sobre el desarrollo y la situación en que se encuentra el conflicto de los docentes. (S.-105-567/88.) (Pág. 2936.)
14. A pedido del señor senador Romero se resuelve girar también a la Comisión de Economía el proyecto de ley de los señores senadores Menem y Sánchez sobre reformas a la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos. (S.-105-603/88.) (Pág. 2937.)
15. Moción de preferencia formulada por el señor senador Molina para considerar en la sesión del 21 de abril, o siguiente, los proyectos de ley de seguro nacional de salud y de obras sociales (C.D.-105/50 y 58/87). Se aprueba. (Pág. 2937.)
16. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley del señor senador de la Rúa sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios (S.-105-452/87). Se aprueba en general. (Pág. 2939.)
17. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2972.)

II. Inserción. (Pág. 2972.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 38 del milno-
coles 6 de abril de 1988:

Sr. Presidente (Otero). — Queda abierta la sesión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Otero). — Invito al señor senador por Jujuy, don Alfredo L. Benítez, a izar la enseña patria en el mástil del recinto.

—Puestos de pie todos los presentes, el señor senador Alfredo L. Benítez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se dará lectura a la lista de asuntos entrados que fueran girados a sus respectivos destinos de acuerdo con la autorización oportunamente conferida a esta Presidencia.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee);

1

Comunicaciones de la Presidencia
Informe del señor presidente del Honorable Senado

Buenos Aires, abril 5 de 1988.

Al honorable cuerpo:

Debo informar que con motivo de la inundación que afectara a la Capital Federal y zonas conurbanas, el suscrito concurrió en representación del Honorable Senado a la sede de Defensa Civil, donde se coordinaban las acciones con funcionarios comunales y organismos pertinentes para atender a los damnificados.

Asimismo se comprometió la donación de setecientas frazadas y la colaboración consistente en prestar personal del Congreso, especializado en trabajos de bombeo y desagote a fin de dar auxilio a las áreas más afectadas, todo lo que se cumplió en representación de los señores senadores y del cuerpo que presido.

Víctor H. Martínez.

—Al archivo.

Decretos de fecha 12 de febrero y 28 de marzo con disposiciones ampliatorias referentes al viaje realizado por el señor presidente del Honorable Senado a la República de Corea. (D.P. 96 y 350-88.) (A sus antecedentes.)

bado y firmado. En consecuencia, no se trata de que pueda caducar esa preferencia sino que habrá de mantenerse en la forma indicada.

También deseo adherir a la posición del señor presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública, en el sentido de que todos los señores senadores debemos procurar que se haga efectivo el tratamiento de estos temas en la sesión del 21 de abril. Ha transcurrido ya bastante tiempo desde que la Cámara de Diputados nos enviara estos asuntos y hemos insistido varias veces en la necesidad de su tratamiento.

De este modo, dejo expresada la petición de mi bloque para que el 21 de abril próximo resolvamos la cuestión.

Sr. Presidente (Otero).— El acuerdo de los presidentes de bloque dice que estos temas se tratarán en la primera sesión que se realice después del 20 de abril.

Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass.— Señor presidente: quiero pedir al señor presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública que me aclare si en las reuniones de comisión vamos a tratar los proyectos que cuentan con sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

Sr. Molina.— Sí, señor senador.

Lo que está en comisión es precisamente lo que tiene sanción de Diputados. Trataremos esos proyectos y también veremos las modificaciones que se propongan, ya que nosotros no somos Cámara de origen y no estamos limitados para ninguna modificación.

Por secretaría haremos la citación a la reunión de las dos comisiones —de Trabajo y Previsión Social y de Asistencia Social y Salud Pública— para el martes o, en su defecto, para el miércoles de la siguiente semana.

Sr. Presidente (Otero).— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador por Santa Cruz en el sentido de fijar para el 21 de abril la consideración de los temas por él indicados.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Martiarena.— Señor presidente: el 21 o siguiente.

Sr. Presidente (Otero).— Así está acordado, señor senador.

Sr. Martiarena.— Gracias.

Sr. Presidente (Otero).— Se procederá en consecuencia.

16

PROHIBICION Y SANCION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS (Continuación)

Sr. Presidente (Otero).— Corresponde continuar con la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías, en el proyecto de ley del señor senador de la Rúa sobre prohibición y sanción de actos discriminatorios. Se debe votar en general.

Sr. de la Rúa.— Pido la palabra.

Sr. Martiarena.— Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero).— En primer lugar tiene la palabra el señor senador por la Capital, y luego el señor senador por Jujuy.

Sr. de la Rúa.— En la sesión anterior se aclaró concluido el debate en general de este proyecto de ley.

Sin embargo, tengo entendido que algunos señores senadores quieren hacer consideraciones generales sobre el mismo.

Quiero anticipar, de nuestra parte, que no hay inconveniente en que se realice el debate. Todo aporte constructivo sirve para el esclarecimiento de los propósitos e intención de la moción del tema en discusión.

Sr. Martiarena.— Señor presidente: debo comenzar por formular una aclaración respecto a la manifestación que ha hecho el señor senador por la Capital: no hay cierre del debate alguno que haya ocurrido en la última sesión.

El señor senador Berhongaray propuso que se declarara cerrado el debate, formulando una moción de orden en ese sentido. De acuerdo con nuestro reglamento, se trataba de una moción de orden que debía ser votada; como no había quórum, no se votó y en consecuencia no hubo cierre de debate. Esto no significa que hoy tengamos que decidir la reapertura de ese debate sino simplemente continuarlo.

Como ocurrió que tan pocos senadores estaban presentes en esa sesión, es obvio que habrían quienes podían tener interés en manifestarse sobre el proyecto en general, de manera que es abona la idea de que no podamos considerar reapertura del debate sino su continuación. Hemos acordado en la reunión de presidentes hacerlo así, porque de lo contrario estaríamos obligados al tratamiento privilegiado y prioritario de la ley de defensa, que sí tenía preferencia acordada y votada para la sesión de hoy.

Sr. de la Rúa.— ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Martiarena.— Si, señor senador.

Sr. de la Rúa. — Aunque no tiene importancia cuestión formal, porque de todos modos va a entrar en el debate, yo tengo otra interpretación.

El presidente declaró cerrado el debate, en su parte general, no por una moción de cierre del mismo, sino porque no había más oradores anotados o que pidiesen la palabra. Lo que no se pudo hacer fue votar en general, pero el debate se cerró por no haber más oradores en lista.

Esta es la razón de la diferencia que tenemos, pero no importa, señor senador. Siga adelante que en el Senado no se retacea la posibilidad de discusión.

Sr. Mariárena. — No tiene importancia, pero tiene importancia. Entonces, cada uno ha dicho su opinión y queda asentada, así como también la interpretación reglamentaria.

Vuelto al proyecto en sí del señor senador Mariárena, ya he manifestado en la sesión anterior que sustituye a los que habían sido aprobados en la Cámara de Diputados y nos coloca

ante un nuevo frente al tema de la discriminación por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad y condiciones similares. Recoge este proyecto el estado de conciencia, que yo podría

trabajar en un proyecto universal, tiene una trayectoria y una historia que es demasiado importante; a tal

grado que en la Cámara de Diputados de la sesión cuando el Poder Ejecutivo envió su iniciativa se expresó con estos términos: en reconocimiento que el Parlamento argentino podía

plantear y expresar al votar una iniciativa relacionada con la sanción y el repudio a toda forma de discriminación.

Este estado general de conciencia universal, en el que participan nuestro país, el pueblo y las

Excellencias, no es realmente un estado de conciencia que podamos decir que siempre está

presente en la práctica, y también en nuestro Estado del acatamiento al principio moral implícito en el requerimiento de no discriminación

por motivos raciales, de nacionalidad, religión, sexo, etcétera.

Este estado de conciencia universal se ha traducido, sí, en regulaciones legislativas de orden internacional y nacional, pero existen toda-

las formas de la sociedad que abominan del principio de igualdad y sobreponen conceptos

parciales machados de odiosidades que debemos evitar y que este proyecto de ley tiende, evidentemente, a coartar.

En el orden internacional esto toma presencia legislativa inmediatamente después de la

Segunda Guerra Mundial a raíz de la devastación, la persecución, las abominaciones de esa

guerra contra las minorías raciales de países ocupados por potencias totalitarias. Y llega a traducirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acerca de la cual tengo interés en que quede constancia, aunque sea repetitivo, de que constituye un timbre de honor y de dignidad para toda la humanidad haber dictado dicha declaración.

En ella se expresa que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado como la inspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias...

Es así como esa declaración regula positivamente que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados, como están, de razón y de conciencia, debiendo comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Es decir que no es sólo un mandato legislativo; es también la incitación a la actitud solidaria de los hombres para con los hombres a fin de salvaguardar el principio fundamental de la dignidad y del respeto por la persona humana.

Esto ha sido confirmado posteriormente y nuestro país ha sido participe —quiero destacarlo— de estas posiciones, cuando se dictó la Convención de las Naciones Unidas, en la III Asamblea General, para la prevención y sanción del delito de genocidio.

Con mucha precisión —aun cuando algunos tratadistas, como lo señaló Soler en alguna oportunidad, no lo crean— se ha expresado qué es el genocidio. El genocidio es el ataque contra grupos sociales por motivos de raza, religión o condición social, para hacerlos desaparecer, someterlos a la esclavitud o colocarlos en una situación de menosprecio y de menor consideración.

Esta convención sobre el delito de genocidio ha fijado normas de carácter general indicando cuáles son las actitudes que se consideran incluidas en el concepto de genocidio. Y hago referencia a esto, porque en el tratamiento en particular voy a proponer algunos artículos que en el proyecto del señor senador de la Rúa y en el dictamen de comisión han incluido, y que es

timo corresponden a las enunciaciones precisas y expresas de la convención sobre genocidio.

Esta convención fue aprobada por la Argentina mediante ley 14.467. También nuestro país aprobó la Convención de Nueva York, de 1967. Quiero destacar que esta Convención de Nueva York, si bien se refiere solamente a la persecución racial, igual que los documentos anteriores, coloca a los países signatarios y adherentes en el compromiso de dictar normas de derecho positivo que hagan efectivas esta prevención y sanción de las persecuciones raciales y otras de índole similar.

También puedo mencionar, en el orden de los antecedentes internacionales, el Convenio III de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por nuestro país mediante la ley 17.677, de 1968. La Legislatura a la que pertenecemos sancionó también la Convención de San José de Costa Rica, donde expresamente se repudia la discriminación racial.

Es decir que, a pesar de su modernidad, estos antecedentes coinciden con lo que nos previste nuestros Constituyentes en la Carta Fundamental. El artículo 14 de la Constitución, al decir "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos...", indica que el goce de estos derechos no admite exclusiones. Esto también está expresado en el artículo 16, cuando dice "... Todos los habitantes son iguales ante la ley...". Igualmente resulta del artículo 17, cuando establece que ningún habitante de la Nación puede ser privado de la propiedad y ningún servicio personal es exigible.

Así mismo el artículo 18 establece que la defensa en juicio es inviolable para todas las personas. Por su parte, el artículo 19 se refiere a las acciones privadas de todos los hombres y dice que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". Finalmente, el artículo 20 extiende estos derechos a todos los extranjeros admitidos en el país. Este repaso preliminar que he querido hacer para destacar ese estado de conciencia universal inscrito en cartas fundamentales de la comunidad de las naciones, traduce el mismo espíritu que los Constituyentes del '53 volcaron en nuestra Carta Magna, y que ahora, al tratar este proyecto, ratificamos como expresivo de la dignidad del ser humano.

Podemos decir que la historia del mundo está llena de luchas, de abominaciones de pueblos contra pueblos y de hombres contra hombres.

La circunstancia de que después de la Segunda Guerra Mundial haya sido la odiosa persecución contra la raza judía uno de los motivos determinantes de encarar el problema de la no discriminación borra en cierto sentido los episodios del pasado. Pero debemos decir y reconocer que no son la motivación exclusiva de esta ley las persecuciones raciales sufridas por el pueblo de Israel. También hay quienes han mencionado por ahí la circunstancia de que el pueblo de Israel tuvo luchas contra otros grupos humanos, y se ha recordado que el Deuteronomio, al darle la Tierra Prometida por Jehová al pueblo de Israel, indicó que debía desalojar a otros grupos humanos que la ocupaban. También por ahí se recordó que Josué, cumpliendo el mandato de Dios, realizó la toma de Jericó, en donde solamente se salvó una cortesana que había atendido y dado asilo a los enviados de Josué. Pero esto es historia antigua. Tan antigua que está solamente en los libros sagrados, que recogen después lo que ha sucedido en el mundo con la raza de Israel.

No leeré todo esto que está escrito en muchas obras; en realidad, hay tratados de varios tomos sobre las persecuciones sufridas por los judíos. Pero tengo aquí un pequeño libro del penalista argentino Francisco Laplaza, sobre el delito de genocidio, en donde recuerda que siete siglos antes de Cristo, los reyes asirios Salmanasar IV y Sargón II tomaron y destruyeron la capital del reino de Israel, Samaria, llevándose cautivos a los sobrevivientes, con lo que se perdieron las diez tribus, mientras las tierras eran pobladas con colonos de los conquistadores.

El mismo libro relata cómo una centuria después en la historia de la humanidad, Nabucodonosor arrasó Jerusalén, saqueó el templo y llevó cautivo al profeta Daniel junto con diez mil prisioneros y los masacró.

Los tolomeos extremaron las matanzas y la esclavitud de hebreos y samaritanos. El Libro III de los Macabeos, apócrifo, refiere que Tolomeo IV Filopator hizo marcar con hierro candente a los judíos de Alejandría. Sigue la historia hasta después de Cristo, cuando Vespasiano, Tito y Adriano, que intervinieron en las guerras judías, destruyeron la ciudad de David. Fueron después en el transcurso de los siglos los hijos de Israel perseguidos en otras latitudes del mundo. Recordemos que están próximos los quinientos años del suceso de la expulsión de los judíos de España. Y recordemos también que las comunidades judías fueron atacadas injustamente porque, en la concepción de la época, se atribuía a la brujería, supuestamente

amparada por los judíos, el sacrificio de niños, repitiendo el sacrificio de Jesús en la cruz.

Surgió el asalto al gueto y la palabra "pogrom", creada a raíz de estas persecuciones, que significa desolación y devastación. Esto, trasladado a los tiempos modernos, a la odiosa persecución durante la Segunda Guerra Mundial, recae en las cámaras de gas, en los campos de concentración, en el aniquilamiento y la masacre de millones de israelitas.

Pero no han sido solamente los judíos las víctimas de las persecuciones. También los cristianos. Recordemos los tiempos del Imperio Romano, en que la masacre de los cristianos era el elemento de regocijo para el pueblo.

Y dentro del cristianismo, entre quienes adoptaron la religión católica no por convicción sino por especulación, encontramos también masacres internas como la degollina de los hugonotes.

Esta es la historia, lo acontecido en el transcurso de los tiempos, que marca cómo la humanidad no ha sabido ser respetuosa de los derechos de los pueblos y de los hombres y cómo cada guerra de conquista, cada ambición, han significado una masacre.

Afortunadamente para el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial y a costa del holocausto del pueblo judío se produce una reacción traducida en estos pronunciamientos del derecho positivo internacional y nacional.

Pero a pesar de ello debemos también tomar en cuenta que este no es un caso limitado a judíos y cristianos. Es recordado, dentro de la historia de los Estados Unidos, lo que sucedió con sus poblaciones indígenas: los indios norteamericanos han sido prácticamente eliminados. Pequeñas minorías raciales se mantienen bajo una situación de ciudadanía de segunda clase. Y no sólo los indios sino también los negros, los japoneses y los chinos, todo hombre o mujer proveniente de Oriente, han sido motivo de persecución y discriminación.

Es importante como reacción que en los Estados Unidos se hayan reunido las Naciones Unidas y que ese país, que presenta en su historia episodios tan desgraciados sobre eliminación masiva de norteamericanos indios y norteamericanos negros, haya suscripto estas declaraciones internacionales y haya evolucionado en estos últimos tiempos reconociendo que no deben mantener más una situación de exclusión de los pueblos que consideren inferiores.

Quisiera recordar que en esa lucha llevada a cabo en los Estados Unidos la figura señera de Abraham Lincoln salva el país del repudio que debieran merecer por una política excluyente,

por motivos de raza y religión, hacia indios y otros pueblos.

Tengo aquí, porque creo que vale la leerla, una cita de Abraham Lincoln que es muy demostrativa del espíritu que llevó a la liberación de los esclavos y a la evolución posterior que ha tenido la civilización norteamericana.

Dijo en una oportunidad: "Nuestro progreso en materia de degeneración política, me parece bastante rápida. Como Nación, comenzamos declarando que todos los hombres han sido creados iguales. Ahora, leemos esa frase si dijera 'Todos los hombres han sido creados iguales, salvo los negros'. Cuando los negros nada —un movimiento que se oponía a la migración y a los extranjeros que ya vivían en el país y que cada vez más sobre la raza el color hacía su oposición— hayan dado a la Nación, la leeremos como si dijera 'Todos los hombres han sido creados iguales, salvo los negros, los extranjeros y los católicos'.

"Cuando llegue ese momento —dijo—, preferiré emigrar a un país donde pueda amar la libertad, a Rusia —por ejemplo— de el despotismo pueda ser tomado en cuenta, sin la aleación baja de la hipocresía.

Fueron palabras nobles e integraron el fundamento de una acción noble.

Sin embargo, durante mucho tiempo más frío los Estados Unidos la forma moral de discriminación por la actuación de agrupaciones antisemitas, de las cuales era el Ku-Klux-Klan el principal digno.

Llegó la deformación hasta el extremo que un presidente de los Estados Unidos, Harding, había jurado como miembro de esa asociación. Naturalmente, estaba comprometido con los principios que ellos expresaban, que el odio a los judíos, a los católicos, a los asiáticos, a todos los nacidos en el extranjero y, sobre todo, a los negros.

Un senador de la nación norteamericana, Charles McNair, dijo: "Creo en la supremacía blanca. Mientras esté en el Senado tengo la esperanza de luchar por ella. Si se permite la amalgama de blancos y negros en este país, surgirá la misma situación que provocó la decadencia de Egipto, de India y otras civilizaciones".

Yo sé que esto ha evolucionado; ha evolucionado bastante en los Estados Unidos. Y en los pueblos como el nuestro, que muchas veces nos encontramos colocados en situación de inferioridad frente a la gran potencia del Norte, debemos recordar que el trascurso de los años y la influencia

de la civilización vayan haciendo superar estas formas odiosas de discriminación.

Sin embargo, en el ámbito mundial parece que el problema se va trasladando de un país a otro. Ahora, el pueblo judío afronta la gran discriminación que se produce en la Rusia soviética, donde millones de judíos viven en condiciones ilegales, no tienen derecho a sus templos, sus libros y sus periódicos bajo la sospecha de que quieren dominar al mundo, como se supone señalado como propósito en los Protocolos de los Sabios de Sión.

En la Rusia soviética se ha levantado una manera de tratamiento al pueblo judío que hace recordar en las formas odiosas —porque no todavía en las nociones totales— a los que existió el antisemitismo durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía no se producen los actos de barbarie de entonces en esa época, pero existe una discriminación que ha hecho que, por ejemplo, Luis Pato en un libro reciente sobre el Holocausto y la KGB, expresara que solamente dicho pueblo judío han podido obtener visados para salir de Rusia y dirigirse a Israel, en un período de alrededor de diez años.

Toda esta significa que nosotros, aunque un poco tardamente —debemos reconocerlo—, al adoptar la sanción de este proyecto de ley, participamos de aquel regocijo inicial de la Cámara de Diputados cuando el Poder Ejecutivo envió su proyecto, se puso en discusión y fue tratado como el tema de los derechos libres, de los argentinos sin prejuicios raciales de esa clase, inscriptos en sus constituciones y en sus leyes. Y digo inscriptos en sus constituciones porque, a pesar de Thomas Jefferson, en cambio, el artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos, que sancionó la Convención de Filadelfia, no tenía la misma redacción que el actualmente vigente, ya que en su texto se proclamaba la igualdad de todos los ciudadanos pero establecía la exclusión de los indios en la decisión para el nombramiento de autoridades y consideraba a cada negro como a un ciudadano que sólo equivalía a las tres quintas partes de un blanco. Lo que Jefferson quiso no se inscribió en la Constitución dictada en Filadelfia.

Este texto que recuerdo es la negación de lo que uno de los fundadores de la unión americana había querido que se estableciera.

Es explicable todas estas cosas porque no quisiera que la voz del sector judicialista quedara ausente de la consideración en general de este proyecto. Estamos totalmente de acuerdo con que se debe dictar una ley que termine la discriminación y también en lo que de nosotros han

querido para que ese estado de consideración universal, esa evolución que se ocurre en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, nos encuentre a todos después de haber eliminado las naciones que los argentinos —a pesar de la letra de la Constitución y de nuestra vocación por este principio— aún ahora vemos y advertimos que existen con relación a sectores de nuestra población.

Aquí en los esquivos poblados de la República la mentalidad, la posición, la consideración, la solidaridad y el respeto que mucha gente tiene hacia los collas de mi provincia o por los indios de Formosa y del Chaco o los del Neuquén, no son los valores que los que tenemos entre nosotros.

Todavía no hemos conseguido que se aplique la ley que aprobamos hace dos años para proteger a nuestros aborígenes. Yo digo que esto es un cambio de discriminación. Ojala que la misma que vamos a dictar hoy suprima de algún modo no solamente para la aplicación de una ley —porque esto no se solucionó voluntariamente con las leyes— sino para que también penetre en la conciencia de cada argentino, en la de cada argentino adinerado, de cada argentino que tenga una posición social y económica remunerable y para que se advierta que hay hermanos argentinos que son discriminados por nosotros mismos y que no merecen serlo por un mandato de la ley o de la Constitución. Cada uno de los argentinos debemos ver en nuestros aborígenes a hermanos con los cuales no tengamos recelos para estrecharlos en un abrazo, compartir la mesa o brindarles el apoyo que necesitan para que definitivamente sea verdad aquello de que los hombres deben ser amigos para los hombres y los pueblos para los pueblos, como dice la frase de Urquiza y del pueblo. De algún modo debemos cambiar esto para un goce emocional de cada uno de nosotros y para la solución de una situación que quisiera ver superada antes de que se acaben los días de mi vida.

Sr. Presidente (Otero).—Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Maquie. —Señor presidente: mi exposición será muy breve toda vez que, como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, suscribí el dictamen que emitió respecto del proyecto en cuestión. Por ello avalo totalmente su contenido y desde luego las modificaciones expuestas formuladas en este recinto por mi querido informante y los valiosos aportes efectuados por otros señores senadores que, con toda claridad, fundaron el repudio unánime

de la conciencia nacional a la discriminación. En consecuencia, considero innecesario insistir en el tema y hablar de sus antecedentes y su historia porque, reitero, ya han sido expuestos con toda claridad.

Sí, quiero remarcar que de esta forma —y creo que algo se ha dicho al respecto— estamos reglamentando el artículo 16 de la Constitución Nacional. Creo que para atender a la naturaleza de la ley y entender sus justos términos debemos saber que ésta es una norma reglamentaria del artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley.

Deseo hacer un par de reflexiones respecto de esta cuestión. En este tema, como en cualquier otro, nos pronunciamos por medio de leyes. Esto es lo que estamos haciendo ahora, con un criterio que en sus objetivos, creo, reúne el consenso de todos los señores senadores. Podemos diferir en la técnica legislativa pero, indudablemente, está en el ánimo de todos reprimir con nuestra mayor energía todo tipo de discriminación.

Pero también quiero decir que la ley no será suficiente porque este tipo de conductas o actitudes no sólo son pasibles de ser reformadas, modificadas o combatidas mediante la ley sino que debe irse a algo más profundo. Considero que tenemos que hacer una verdadera docencia de este principio de igualdad ante la ley que rechace todo tipo de discriminación.

Con el señor senador Sánchez presentamos en una oportunidad un proyecto de comunicación por el que se solicitaba la inclusión del tema de los derechos humanos en los programas de enseñanza de todos los establecimientos educacionales del país. Así lo hicimos en mi provincia: en La Rioja existe una materia sobre derechos humanos en la enseñanza de los niveles que dependen de la jurisdicción provincial. Considero que lo mismo tiene que hacerse en el orden nacional y dentro de la enseñanza de los derechos humanos debe incluirse un capítulo especial respecto del tema de la discriminación. Pienso que desde la más tierna niñez debemos enseñarles la historia de la discriminación a nuestros ciudadanos y crearles la conciencia de repudio hacia este tipo de actitudes porque, lamentablemente, todavía existen algunos especímenes que se deleitan o gozan con una suerte de instinto de perversidad brutal haciendo discriminación por razones de religión, raza, color o condición social.

Debemos tomar conciencia de que no vamos a erradicar esto únicamente con la sanción de la ley sino que además debemos incluirlo co-

mo un capítulo especial en la enseñanza de los derechos humanos.

Hecha esta reflexión y para concluir con esta exposición, quiero decir que después de firmado el dictamen he seguido meditando sobre este tema. Me había quedado con alguna duda e, inclusive, conversé al respecto con el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador de la Rúa. Nos pusimos de acuerdo en proponer una reforma al dictamen en lo referido a la inclusión de distintas normas de derecho penal. Esto es así porque la técnica que se ha seguido en este valioso proyecto fue la de tomar determinados tipos penales y calificarlos con un agravante en el caso de que los delitos fuesen cometidos por diferentes formas de discriminación.

Meditando más profundamente el tema, hemos advertido que, además de los tipos penales contemplados en el proyecto, pueden presentarse muchas otras situaciones semejantes no alcanzadas por la iniciativa en consideración.

Por ejemplo, en ella se hace referencia a los delitos de privación ilegítima de la libertad, incendio, amenazas, homicidios, daños, apología del delito; sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que muchos otros delitos también pueden ser cometidos con motivo de actos de discriminación. Por ejemplo, hay otras figuras no contempladas por el proyecto que importan también privaciones ilegítimas de la libertad y, si no lo modificamos, no resultarán atrapadas por la norma penal. Tomemos el caso de un funcionario que retardara la puesta en libertad de una persona, ordenada por el juez, con motivo de un acto de discriminación en contra de ese preso. Allí también existiría un delito cometido por discriminación. Otro caso posible es el de una extorsión que se realice con motivo de un odio religioso, racial o político. Podrían darse también otras situaciones, como la suposición de estado civil, el abuso de armas, la violación de secretos y otros delitos contra la libertad de trabajo y de asociación. Adviertan qué peligrosas pueden resultar estas situaciones si no están debidamente penadas; por ejemplo, si se trata de obstaculizar una reunión porque a alguien no le gustó la raza de los que habrán de participar.

En concreto, los actos de discriminación pueden ser cometidos prácticamente a través de todas las figuras del Código Penal. Entonces, si estamos todos de acuerdo en reprimir penalmente la discriminación, tratemos de que pueda ser objeto de agravantes de todas las figuras penales, no sólo de las que están contempladas

en el proyecto sino también de los otros delitos que están reprimidos por el Código.

Por eso hemos pensado con el señor senador por la Capital Federal doctor de la Rúa en hacer algunas modificaciones y nos pusimos más o menos de acuerdo en incluir una norma genérica que establezca que cuando cualquiera de estos delitos fuese cometido por una cuestión de odio a una raza, a un grupo étnico, a una religión o a una nacionalidad, o se cometiese para perseguir u hostigar a los integrantes de esos grupos por cualquiera de esas razones, las escalas penales se agravarán en un tercio del mínimo hasta la mitad del máximo, no superando las de la especie de la pena de que se trate.

Creo que en esta forma defendemos mejor los bienes jurídicamente protegidos que queremos preservar y evitamos que, al hacer una determinada individualización de ciertos tipos penales, nos olvidemos de otros.

Por ese motivo, concretamente, en el tratamiento en particular del proyecto de ley, cuando entremos a analizar esta cuestión de las distintas modificaciones al Código Penal, voy a proponer que establezcamos una norma genérica que incluya para todos los tipos penales un agravamiento general de la pena cuando se cometiesen por razones de discriminación.

En todo lo demás, estoy de acuerdo. Quizá en algún artículo pueda proponer alguna ligera modificación, pero estoy totalmente de acuerdo y adelanto mi voto favorable al mismo.

Sr. Presidente (Otero).— Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Juárez.— Señor presidente: confieso sinceramente que ésta es una noche feliz para mi conciencia humana, para mi conciencia argentina.

No he tenido la grata oportunidad de escuchar el informe del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales por mi ausencia del recinto en esa ocasión; pero, desde luego, me siento solidario con las altas motivaciones que han generado este proyecto de ley tan avanzado desde el punto de vista humano y social que hoy consideramos, quizá, sin darle la debida dimensión que ha de adquirir esta ley a través de los tiempos. Es la primera ley que se sanciona en el país contra la discriminación. ¡Y qué extensión más dilatada la de este proyecto!

El señor senador Martiarena ha formulado un análisis cronológico que se adentró en los tiempos y nos ha ilustrado con esos episodios que quizás nosotros teníamos ya olvidados en el des-

ván de nuestras memorias históricas, haciéndonos pasear por los tiempos para retrotraer las horribles, horrendas discriminaciones que hubo en tiempos del pasado, donde el concepto de la solidaridad humana todavía no se encontraba suficientemente fortalecido y afianzado.

Particularmente he sido víctima en este país durante una fractura institucional, junto con copartícipes de mi ideología política. Allí por el 55, fui arrumbado en una celda por tres años, nada más que por mi ideología política.

Y se vivió el episodio más desdorado que jamás haya presenciado el cono sur americano, cuando el gobierno de facto dictó una ley prohibiendo hasta un estribillo, sancionando también penalmente al que tenía una fotografía o un folleto doctrinario. ¡Qué vejatoria situación que pasamos, señor presidente! Y, ¿en nombre de qué? En nombre del frenesí desatado por el odio; y lo presenció la República demudada. Todo esto hoy, con una sola votación, va a ser definitivamente archivado como cosa del pasado.

Esta es, nada más ni nada menos, que la feliz iniciativa de la norma que se proyecta.

Este país nació abierto a todas las corrientes humanas del mundo que quisieran venir a asentarse y a unir su sangre con la nuestra en la ruta del trabajo diario, del sacrificio penurioso, para levantar los cimientos de esta República que hoy disfrutamos.

Este país, que ha presenciado actos semejantes, nació bajo el símbolo del amparo a todas las ideologías e incluso a todas las convicciones religiosas.

No por demás sabido, no ha de resultar adecuado que yo lea ese párrafo del preámbulo de nuestra Constitución que dice: "...promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino..." Esto implica asegurar el bienestar y la libertad para todos los hombres que vivan en este país.

Es el gran compromiso y el gran desafío que durante tantos años tuvo la democracia de nuestra patria, que hoy adquiere su respuesta constructiva y cimentaria.

Urgido por las cosas de la vida que uno lleva, a veces no se tiene tanto tiempo para ahondar en el estudio de una temática como la que consideramos, con la responsabilidad que ello implica. Pero en estos días he tenido dos lecturas meditadas sobre cada una de las palabras que encierra este proyecto de ley. Así, quiero ir más allá de lo que se ha dicho en forma tan constructiva y que yo he escuchado con

tanta satisfacción. Hay algo que campea en este proyecto que va más allá de estos episodios de intolerancia ideológica, racial, religiosa.

Se han introducido —no pido que me escuchén atentamente los miembros de la comisión, que sé que han elaborado esto meditadamente— vocablos nuevos de proyecciones insospechadas —no sé si podría decir de proyecciones casi imprevisibles— porque a través de la economía conceptual del artículo 1º he podido advertir una especie de una nueva extremidad a la razón primaria que genera esta iniciativa.

Siempre, en el trajín y en el desovillado de los años, las persecuciones, las discriminaciones o los actos de intolerancia los consumaban las mayorías contra las minorías.

Y yo creo que acá pudo revertirse esta situación y llegarse incluso a la sanción de la intolerancia de las minorías con las mayorías, o de formas discriminatorias que hoy pueden quedar comprendidas dentro de este concepto fundamental.

¿A qué estoy queriendo hacer referencia cuando hablo de la amplitud —que no considero exagerada— de estos principios que campean en este artículo? Por primera vez se incorporan estas palabras nuevas, de repercusión, repito, quizá insospechada. No se sanciona acá solamente la discriminación que involucre incentivos ideológicos, políticos, religiosos o raciales. Entramos en un área nueva, cuyas fronteras pueden estar bastante distantes. Se habla de discriminaciones por razones de posición económica, de condición social, de sexo, o incluso, de caracteres físicos, discriminaciones que puedan efectuarse en atención a la condición económica y social y discriminaciones que atenten contra derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución Nacional.

Yo me pregunto si el afectar un derecho social garantizado por la Constitución no va a estar también contemplado en el área de las discriminaciones sancionadas. ¿A qué me estoy queriendo referir, señor presidente? El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a los trabajadores el derecho a una retribución justa. Dice este artículo: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa...". La Constitución garantiza, repito, a los trabajadores del país el derecho a una retribución justa.

¿Qué ocurre, entonces, cuando alguien no cumple, cuando alguien transgrede, roza, vulnera este derecho amparado por la Constitución,

que garantiza al trabajador una retribución justa? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy, cuando hay una inmensa masa de trabajadores que formula protestas airadas en todos los ámbitos del país?

Alguien me podría decir que no hay aquí un acto discriminatorio. Ante esa hipótesis de abogado del Diablo respondería que, efectivamente, aquí puede existir un acto discriminatorio, pero mientras a una enorme masa de trabajadores no se le paga la retribución justa a que tienen derecho, bajo la protección de la Constitución Nacional en su artículo 14, hay sin embargo una minoría de privilegiados que se dedica especialmente a las tareas de la especulación, que sí disfruta de suculentos beneficios.

Ergo, aquí, en el fondo, hay una discriminación: mientras unos progresan y se enriquecen, otros descienden y se empobrecen.

Quiero significar que el contenido nuevo de estos vocablos que por primera vez se insertan, que prohíben las discriminaciones por razones económicas, sociales, puede tener repercusiones realmente inesperadas.

Me parece una gran conquista que se haya avanzado de esta manera en la protección de los derechos de los hombres, que necesitan amparo por su condición económica, social, e incluso por el sexo. ¿Qué artículo más amplio, más generoso y comprensivo!

No he tenido tiempo de adentrarme en la legislación comprada y no sé si esto existe en otras legislaciones del mundo, pero sí puedo decir que se trata de un avance imponderable para la legislación argentina. Se trata de que se lleguen a prohibir las discriminaciones por razones económicas, sociales o de sexo e, incluso, de defectos físicos. ¿Qué minuciosidad protectora la de este proyecto! Y si alguien transgrede estas normas el damnificado puede recurrir para que cese el acto lesivo y obtenga la reparación consecuente en el orden civil.

Se pueden advertir, entonces, la amplitud que quizá pueda tener este dispositivo aplicado a estos tiempos que vive la República en lo referido a los órdenes económico y social.

He analizado en los artículos subsiguientes el agravamiento de las penas en los distintos tipos penológicos motivados por estas reacciones bajas —podría decir— de la carne humana; estas motivaciones impulsoras, que pueden expresarse por toda la gama tipológica del derecho penal. Precisamente, desconocía el razonamiento del que me habló hoy el señor senador Menem, legislador estudioso y capaz, señalando que había intercambiado sus inquietudes con el señor se-

nador de la Rúa acerca de estos aspectos, llegando a unificar en un artículo todas las posibilidades tipológicas, para ser agravadas por este género de incentivaciones del delito. Lo mismo había pensado yo, aunque no en esta genérica comprensión de todos los tipos penales.

Pero advierta la ciudadanía —los señores senadores ya están advertidos a través de la lectura y del estudio— que se llegan a sancionar las exacerbaciones del machismo argentino, quizás porque se sanciona a quienes agreden prevalecidos de pertenecer al "sexo fuerte".

Tal vez dentro de esta comprensión lata, lleguen a existir casos como uno que ha conmovido a la opinión pública a través de la publicidad de estas últimas semanas. A partir de un hecho resonante acaecido en Mar del Plata se han puesto en evidencia aspectos de un submundo vigente en los usos familiares. Nos hemos informado con estupor de la costumbre de algunos machistas de apalear o maltratar a sus esposas o mujeres nada más que porque pertenecen al sexo débil.

Y esto ahora va a estar penado como un agravante de esos ataques. Veo la sonrisa placentera de la senadora por Mendoza, complacida quizá por esta amplitud punitiva de este nuevo ordenamiento legal.

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Juárez. — Cómo no.

Sr. de la Rúa. — Deseo hacer una aclaración de modo que no se afecte la unidad del brillante análisis que viene realizando.

En la parte penal del proyecto de ley el incremento de las penas se refiere a los actos cometidos por razones de persecución u odio hacia una raza, religión, nacionalidad, etcétera. La prohibición de discriminación por razones de sexo corresponde al artículo 1º, a las relaciones civiles. Pero, en realidad, podemos considerar su inclusión como agravante de los delitos comunes.

Sr. Juárez. — A eso quería llegar.

Sr. de la Rúa. — Porque los delitos comunes se dan entre hombres y mujeres o entre hombres y hombres y sería imposible llegar al agravante...

Sr. Juárez. — A eso quiero llegar. El señor senador se ha anticipado con mucha lógica, podría decir —la lógica creada por el ordenamiento, desde luego—, a lo que yo quiero añadir.

Pido al señor senador de la Rúa, a los informantes, al señor senador Menem y a los miembros de la comisión que consideren precisamente que estos agravantes no se limiten

a los excesos que se puedan cometer en el orden civil. Porque, ¿solamente en el orden civil vamos a punir eso? ¿Solamente en el orden civil vamos a proteger a las mujeres? ¿No en el orden penal? ¿Solamente en el orden civil vamos a amparar y prever la condición social o económica?

He hecho bastante derecho penal y con esa experiencia que me ha dado el ejercicio largo de la profesión en esa materia del Derecho les pido que no se limiten a ese dispositivo civil del artículo 1º sino que constituya un agravante también la agresión al sexo femenino por ser sexo débil.

Y no me refiero solamente a estos casos. La historia de la criminología, sobre todo en los Estados Unidos, demuestra la existencia de cópulas, o poco menos, que se dedican específicamente a agredir a mujeres por diversas motivaciones personales, y creo que también tiene que ser un agravante el delito que se pueda consumir contra un ser por su condición social.

Ya no son las épocas del rebenque. No puede ser que el patrón reaccione contra el obrero porque simplemente es obrero, porque está a sus órdenes o porque lo considera desigual. Lo mismo sucede al revés: cuando se produce la agresión por parte del obrero que se deja llevar nada más que por su rencor antipatronal.

Esto debe ser un agravante. No tiene lógica sancionar en el orden civil lo que no se va a sancionar penalmente.

No puede tener la misma sanción quien pega a un inválido que aquel que tiene la misma actitud con una persona dotada físicamente en forma normal. Esto es lo que debe proteger, y a mi juicio está protegiendo, el artículo 1º.

Es por ello que recorro a la consideración y sensibilidad de los señores senadores para que tengan en cuenta estas lucubraciones que apunto con relación a este asunto y solicito que tengan en cuenta también la justicia que conlleva el considerar agravado el delito por esas circunstancias.

Sr. Menem. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Juárez. — Como no.

Sr. Menem. — Es a los fines de efectuar una aclaración en el momento oportuno y no con el ánimo de interrumpir el brillante análisis que viene haciendo, con tanta minuciosidad, el señor senador Juárez.

Quiero formular la siguiente reflexión: es verdad que todas las circunstancias que mencio-

haya el señor senador, que están en la parte civil y no en la penal, pueden dar lugar a las dudas que legítimamente él planteaba. Lo que ocurre es que la filosofía de la ley se refiere a la discriminación vinculada con las condiciones de raza, nacionalidad o religión, todas circunstancias que están explicitadas en las normas penales.

Con respecto a las otras cuestiones que están en las normas civiles, no se las incluye específicamente en el ámbito penal por la sencilla razón de que ya están contempladas en el artículo 41 del Código Penal, que se refiere a las condiciones de individualización de la pena. Es decir, cuando el juez va a aplicar la norma penal tiene en cuenta una serie de circunstancias que pueden obrar como atenuantes o como agra-

Entonces, esta circunstancia —como por ejemplo el hecho de que la persona pertenezca al sexo débil o que sea inválida o disminuida físicamente— está contemplada y el juez está facultado para moverse dentro de una determinada escala penal. En consecuencia, la pena será mayor o menor según que concurren esas circunstancias o no. En apoyo de esta interpretación —y no quiero pasar por encima del espíritu que ha animado al autor del proyecto—, creo que ésta ha sido la circunstancia, la razón, por la cual estos hechos se incluyen en la modificación del Código Civil y no en el ámbito del Código Penal.

Por ejemplo, el artículo 40 del Código Penal, respecto de las penas, dice: "En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente". En el artículo siguiente se dice que a los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados. Después, en el inciso segundo dice: "La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o

menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso".

Quiere decir que en un delito de lesiones el juez tiene que moverse dentro de una escala de un mes a dos años —no recuerdo exactamente la pena—. Pero si la lesión se le ha inferido a un inválido, indudablemente el juez va a aplicar una pena mayor que la correspondiente para el caso en que la víctima está en mejores condiciones de defensa. La pena será mayor si la víctima ha sido una mujer, pero no porque este hecho esté penado de forma distinta sino porque el Código Penal le dice al juez que se mueva en esa escala y aplique una pena mayor o menor. Esta es la circunstancia por la cual algunas situaciones están en el ámbito civil y no en el penal.

Le agradezco que me haya concedido la interrupción y le pido que me disculpe por la vehemencia de mis palabras.

Sr. Presidente (Otero). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Juárez. — Lo he escuchado con toda atención y paso a refutarlo.

Lo que dice el señor senador es obvio. El artículo 41 fija las pautas que ha de tener en cuenta el juez en lo penal para graduar la pena, pero ésta es una norma genérica para todos los casos de graduación de las penas. Entonces le digo que sería insuficiente crear esta clase de especulaciones y de transgresiones, porque también podría ser objeto de consideración por el juez el hecho de que los delitos estén motivados por causas sociales o religiosas y por ideologías políticas.

Lo que estoy diciendo es que así como se especifica una cosa se debe especificar la otra, porque el artículo 41 no es tan pautativo como para decir que en el caso de pegarle a una mujer la pena es de tres años y en el caso de pegarle a un hombre, de dos. Esta interpretación no está en ninguna parte.

Además, en ningún dispositivo del Código Penal se dice que el patrón que le pegue al empleado o al obrero —lo que ocurre sobre todo allá en los andurriales del campo— esté abusando de la situación de dependencia. En ninguna parte se dice que el juez vaya a agravar la pena por tal causal.

A la inversa, he tenido algún antecedente de un obrero que mató al patrón simplemente porque no lo quería, porque era el patrón, porque no le pagaba bien. Se me podrá decir que está dentro de las condiciones y circunstancias que debe evaluar el juez.

Como vemos, también pueden suceder estas cosas, por lo que hay que incluir estas motivaciones. El sexo no está incluido, como tampoco lo están estas otras circunstancias de la dependencia económica y la condición social. Esto no está previsto. Si no incluimos esto hacemos discriminación dentro de una ley no discriminatoria. Cuando entramos en el orden penal excluimos lo que se sanciona en el orden civil y esto resulta poco coherente.

Creo que la justicia y perfección de esta estructura legal debe basarse en el traslado de todas estas motivaciones al orden penal.

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Juárez. — Sí, señor senador.

Sr. de la Rúa. — Con el mismo sentido de contribuir al esclarecimiento del tema a través del aporte de ideas que se está realizando, quiero decirle que con este proyecto de ley no intentamos hacer la reforma penal integral, prevista para otra ocasión.

La situación del sexo a que se refiere el señor senador en cierto modo está contemplada en el Código Penal; consideramos que no era del caso cambiar la estructura del Código en esta materia.

Sr. Juárez. — Me referí al sexo y a la condición social y económica; o sea los tres casos que ustedes mencionan muy sabiamente en la parte civil.

Sr. de la Rúa. — Respecto del sexo, observe que el Código Penal califica el homicidio y las lesiones cuando son cometidas contra la mujer que tiene respecto al autor del delito la calidad de esposa o de hija...

Sr. Juárez. — Nada más.

Sr. de la Rúa. — ... y viceversa, cuando el autor del hecho es una mujer y la víctima es el hombre, siempre que estén ligados por el vínculo familiar o de parentesco.

Si se estableciera en este proyecto una calificación genérica para todos los casos en que la víctima es una mujer, se destruiría por comple-

to la estructura y equilibrio del Código Penal. La diferencia de calificación perdería sentido. De modo que esta no es razón suficiente para modificar toda la estructura del Código Penal.

El artículo 1º quiere consagrar una protección del principio de igualdad ante la ley, incluso por razones raciales y religiosas; la igualdad de todos, cualquiera sea la raza, religión, condición física, etcétera. Lo que se sanciona de manera agravada en la parte penal de las disposiciones no es la simple desigualdad sino las actitudes de odio o de persecución; se trata de una conducta distinta, especialmente disvaliosa. Por eso se establece allí que tendrá una pena agravada todo lo que represente manifestación de odio o persecución por razones raciales o religiosas. No pareciera lógico, desde el punto de vista conceptual, pensar en odio por razones de sexo o de condición social; y sí suficiente la protección del derecho de igualdad contemplado en el artículo 1º.

En este sentido tratamos de ser prudentes cuando avanzamos en disposiciones penales. Es cierto que la mayoría de los derechos del Código Civil tienen su resguardo en una norma penal, pero esto no sucede con todos. Hay que ser cuidadosos con las normas penales que se refieren a otro campo de orientación de la conducta.

Quería aclarar la diferencia de concepto entre el término "discriminatorio" del artículo 1º del proyecto y de "persecución u odio" de estos artículos de reforma del Código Penal. En cambio, la incitación a la discriminación y su propaganda constituyen conductas previstas especialmente en el último artículo del proyecto.

Sr. Juárez. — Señor senador: insisto en que esas motivaciones por lo menos a mí no me persuaden. Acá no se habla solamente del odio sino de la persecución política. ¿Y por qué no de la persecución social? ¿La persecución política, sí y la social no? ¿Estamos acá haciendo una diferenciación entre lo político y lo social? Entonces, se puede agredir por odio social, hecho que existe, y esto no constituye agravante. En cambio, si es por odio, rencor o persecución política, sí.

Este es el punto que quiero considerar. No se limite, señor senador, al aspecto del sexo, escapándose de la condición económica y social que nosotros, los justicialistas, tenemos la obligación primera de cuidar; me refiero a la persecución social que ha habido en nuestro país. Se ha perseguido a obreros nada más que por esa condi-

ción y han desaparecido nada más que por haber sido líderes o dirigentes gremiales.

¿Estas situaciones no están penalmente agravadas? Si se trata de un dirigente político, si lo están. Si, en cambio, se tratara de un dirigente gremial, ¿el delito no resulta agravado?

Le pido al señor senador que por favor reflexione y no se aferre demasiado al amor que le pone a sus creaciones, que yo pondero sin duda. Pero advierta el señor senador que entre lo político y lo social no hay sino un límite muy sutil y subjetivo y, por lo tanto, no podemos hacer diferenciaciones entre lo político, lo social y lo económico, sin faltar a la equidad. Ya no me refiero al sexo porque tal vez me pueda ayudar en ese tema la señora senadora por Mendoza que está al lado del senador por la Capital.

Finalmente, le pido que considere que esto es así. A su vez, le solicito al señor senador Menem, como hombre de nuestra causa, que no deje de lado la aplicación de sanciones a las discriminaciones que pueden realizarse en el campo de lo social y también en lo económico.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: después de las profundas exposiciones realizadas creo que es muy poco lo que tengo que decir.

Luego de treinta y cinco años de hacer ejercicio de la docencia no puedo dejar pasar la oportunidad de expresar mi sentimiento cuando esta noche se está debatiendo un proyecto tan profundo que representa verdaderamente uno de los instrumentos que le estaba faltando a esta democracia que estamos tratando de consolidar.

Quiero decir unas pocas palabras, señor presidente, para denunciar lo que no pude expresar en otro ámbito, aprovechando la ocasión que me brinda la consideración de este proyecto.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador Adolfo Cass.

Sra. Malharro de Torres. — Si hay un ámbito en este y otros países donde se producen actos de discriminación, es el educativo.

Durante el ejercicio de mi profesión he tenido que vivir situaciones donde se discriminaba en las escuelas a los hijos de judíos y de musulmanes. Como senador de la Nación Argentina, de tur-

no, de acuerdo con el marco en el cual estaba inscrito.

Por esto le preguntaba hace un rato a mi compañero de bancada si el artículo 1º del proyecto comprende una sanción también para quienes en el ámbito educativo ejercen actos de discriminación.

Recuerden ustedes, señores senadores, su paso por la escuela primaria, secundaria o por la universidad y digan si no han presenciado actos discriminatorios. Nunca me voy a olvidar de un hecho que me tocó vivir cuando tuve que hacerme cargo de la dirección de la escuela secundaria dependiente de la Universidad de Cuyo; lo digo con todas las palabras. En efecto, creyendo que se me hacía un gran favor, uno de los empleados administrativos me trajo la lista de los alumnos judíos y musulmanes que estaban en esa escuela. Allí mismo, y también por otras circunstancias, advertí que se realizaba una discriminación racial tremenda, al punto de que en una ocasión se buscaron todos los subterfugios para que un alumno de origen judío, que cumplía con todas las condiciones reglamentarias, no pudiera acceder a ser abandonado de ese establecimiento.

Por eso, cómo no voy a sentirme reconfortada porque esta noche se trate un proyecto de estas características. De cualquier modo, insisto en que si hay un campo donde se practica la discriminación, es el escolar.

Coincido con el señor senador Juárez, si bien tal vez no completamente, en que también en las escuelas se hace discriminación social y económica; inclusive en las estatales, fundamentalmente en las primarias y secundarias. Lo podemos ver, lo hemos advertido y vivido.

Entonces, señor presidente, no será extraño que cuando este proyecto sea definitivamente ley, solicite a todos mis pares que me acompañen en una iniciativa por la cual se pida que esta ley llegue inexorablemente al conocimiento de todo aquel que tenga la responsabilidad de la conducción de un establecimiento educativo, cualquiera sea su nivel.

Dios quiera que se solucione el problema económico de los docentes. Pero desde aquí les digo a mis compañeros docentes, a mis colegas docentes: no solamente tenemos que mejorar el aspecto económico del quehacer docente, sino también debemos analizar estos hechos que dejan estigmas terribles en los alumnos, niños y adolescentes, que muchas ve-

ces sufren una tremenda discriminación racial, religiosa, económica y social. A veces esos hombres y mujeres son amargados, enconados y no se sabe por qué, cuando aparentemente tienen todo. Y la explicación es que, cuando se les debió dar la igualdad de trato durante su formación, recibieron ese látigo oscuro, esa cosa sinuosa que no se ve de frente pero se siente en el alma y que menoscaba, deforma y crea hombres y mujeres resentidos.

Sr. Presidente (Cass). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — He escuchado con atención la sesión anterior y hoy las exposiciones sobre este proyecto contra la discriminación.

Brevemente quiero fundar mi adhesión, que la expreso con gran satisfacción. Creo que toda disposición que tienda a asegurar los derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional enriquece nuestra creencia en la dignidad de la persona humana y garantiza la igualdad de todos los hombres ante la ley, sin distinciones ni discriminaciones de ninguna naturaleza.

De esta manera, señor presidente, dejo fundado mi voto afirmativo a este proyecto contra la discriminación de todo tipo.

Sr. Presidente (Cass). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente, señores senadores: los representantes del Partido Bloquista queremos adelantar que votaremos favorablemente este importante proyecto de ley que enriquece los principios ya consagrados por la Constitución Nacional, que han sido también insertados hace algunos años o décadas en ciertas constituciones provinciales.

Seré muy breve porque en la sesión anterior y en ésta se han hecho exposiciones muy precisas y documentadas, y no es del caso insistir con nuevas expresiones.

Pero me parece justo recordar que, en 1927, cuando eran muy acentuadas las discriminaciones, la Constitución de San Juan de ese año, en el capítulo que aludía a las discriminaciones —siendo imperiosa la necesidad urgente de terminar con algunas de ellas—, otorgaba a la mujer, postergada en el mundo y también en nuestro país, el derecho al voto.

Lo había hecho Sarmiento a nivel de municipio durante su presidencia, pero no se había establecido el voto de la mujer a nivel nacional, lo que ocurre en 1946, cuando accede al poder

un movimiento popular, el justicialismo, que concede el derecho al voto y otros que les eran negados a la mujer.

Esta ley señala también otro tipo de discriminaciones: por religión, por raza, por color, etcétera. Es una iniciativa que, de ser aprobada, se constituirá en un paso fundamental que daremos los integrantes de este Parlamento. Tal vez queden para el futuro algunas otras cosas que tendremos que enmendar.

Mientras tratamos este importante proyecto, que no dudo va a ser aprobado en general y en particular, leía en un diario vespertino de la fecha algo que tal vez los va a sorprender a ustedes. A mí particularmente me ha tocado.

No voy a referirme in extenso a este artículo; sólo voy a decir dos palabras al respecto. En un país extremadamente civilizado y progresista, con un gran desarrollo industrial como es Italia, el que tuvo la posibilidad de conocer y donde trabajé y he representado a mi país no hace muchos años, se produce un acontecimiento que trata el artículo en cuestión, cuyo titular dice: "Vuelven los cinturones de castidad".

El vespertino publica la fotografía de un conocido artista italiano y da el nombre de seis damas jóvenes de la sociedad italiana que han visto a este famoso artista para que, por pedido, de sus respectivos esposos, les confeccione esos cinturones de castidad.

El artista se llama Angelo Camerino Da Greco y da detalles del caso que no es la oportunidad de comentar. Simplemente voy a pedir que este artículo se inserte en el Diario de Sesiones.

—Asentimiento¹.

Sr. Bravo. — Supongo que, desde el momento en que estos cinturones de castidad han sido encargados, es para que sean usados. Pero lo interesante es que tal vez van a ser pedidos por industriales y gente de poder porque también pueden usarse como elemento decorativo en las hermosas residencias que hay en Italia.

Evidentemente, se trata de algo que, en el siglo que vivimos, va a llamar la atención de todos.

Dice el artículo que los "machos" italianos están redescubriendo un retorno a los métodos

¹ Ver el Apéndice.

de la antigüedad. Y hasta da el precio: cada cinturón de castidad cuesta dos millones de liras, que traduce incluso a dólares.

He querido traer esta cita al Honorable Senado para hacer notar que nuestra legislación está avanzando. Ello surge de las exposiciones de los señores senadores. Pero todavía hay resabios en el mundo, en países como este que he mencionado, donde persisten estos episodios que resultan risibles porque parecería que estaban borrados definitivamente de la conciencia de los seres humanos.

No voy a abundar en más consideraciones sobre el particular porque he pedido que este breve artículo se inserte en el Diario de Sesiones para que quede, para las futuras generaciones, como un signo de un país al que todos queremos, pero donde no se han podido eliminar algunas actitudes.

En nombre del bloque del partido que presento adelanto mi voto favorable en general y me reservo el derecho de proponer algunas modificaciones en particular.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia, senador Luis Rubeo.

Sr. Presidente (Rubio). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: es indudable que la trascendencia de este proyecto que se va a aprobar ha llevado a una escrupulosidad tremenda, con citas como la que acaba de realizar el señor senador por San Juan, y con puntualizaciones como la realizada por la señora senadora por Mendoza con respecto a la educación. Y ambos hechos son ciertos.

Lo que yo no acepto es que con esto se dé la imagen de que aquí hay realmente discriminación.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Edison Otero.

Sr. Sánchez. — En todo proceso histórico, político y social, a medida que avanzan las naciones se van superando viejos esquemas, se van elastizando las mentalidades y se van cambiando los conceptos. No podemos traer aquí a colación que muchas veces hemos escuchado a extranjeros decir: "Estos criollos son flojos, no les gusta estudiar, ni trabajar..." con un marcado sentido de superioridad racial.

Congreso de la Nación Argentina
Información Parlamentaria

Es cierto que algunas veces en las escuelas mentalidades torcidas discriminaron a los alumnos por el color de su piel o por su origen racial. Pero todo esto queda desvirtuado con los hechos que vive la Nación. En este Parlamento hay descendientes de judíos, de árabes, de italianos, de distintos signos raciales, y también hay, digámoslo así, representantes del criollo. Esto nos está planteando con meridiana claridad que en nuestra Argentina no existe la mentalidad de separar a los hombres por su credo, por su piel o por su raza.

Esta breve intervención es, pues, a los efectos de que esto quede claro, porque el énfasis puesto por la señora senadora nos puede llevar a pintar un panorama negro que en realidad no existe. Lo importante es el fondo de la ley, es el espíritu que ponemos en este instrumento legal para castigar, en nombre de las mayorías, a aquellos grupos minúsculos que aún creen en las diferencias entre los hombres. Preservamos la dignidad humana, imponemos el respeto al ser humano como tal, y estamos totalmente de acuerdo en que es necesario que la dirigencia del país en el campo político, económico, gremial, etcétera, realice una tarea de docencia para evitar que se envenene el alma de los niños, enseñándoles a que se crean superiores porque tengan más dinero o porque su origen se remonte a mucho antes en la vida del pueblo.

Creo que se ha agotado la argumentación para la fundamentación de este proyecto que, sin lugar a dudas, será histórico, que se dimensionará con el correr de los tiempos y que viene a reafirmar y a certificar el espíritu democrático de la Argentina, cuando desde los albores de su independencia dejó establecido el respeto por los derechos del hombre.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: yo también, como manifestaron algunos señores senadores, voy a tratar de ser lo más breve posible.

He seguido muy atentamente la exposición del señor senador Martiarena y en algún momento pensé que habría leído —al igual que yo— un libro muy interesante y muy largo, que se llama *La memoria de Abraham*, que ha sido escrito por un escritor de nota, Marek Halter, de nacionalidad francesa, de ascendencia judía y que vivió durante muchos años en la República Argentina.

En este libro, Halter describe, desde el inicio del cristianismo, todas las persecuciones que hu-

bo así como también las ocurridas antes del cristianismo; cómo se persiguió, no sólo a los judíos, sino, en la época de los romanos, a los cristianos, que recién empezaban a surgir. Y se veía ahí la solidaridad —descrita brillantemente en este libro— entre dos religiones que estaban siendo perseguidas.

Estoy convencido de que cuando el Poder Ejecutivo de la Nación envió el proyecto de una ley antidiscriminatoria, no pensó que iba a ser tan amplia, tal como afortunadamente le dio cabida el señor senador de la Rúa, cuya brillante e interesante exposición he leído en la versión taquigráfica. Creo que ello fue así, como para no hacernos los distraídos.

Cuando tuve el altísimo honor de representar a la República Argentina en el Estado de Israel, como jefe de misión, al llegar me encontré con que todos los periódicos israelíes hablaban del antisemitismo en la Argentina. Entonces me dije: "¡Qué casualidad!" E inmediatamente convoqué a una conferencia de prensa, mencionando lo siguiente: "Yo sólo puedo demostrarles que no hay antisemitismo en la Argentina, porque soy semita. No puedo negar —y no lo hago tampoco hoy— que en nuestro país haya antisemitas, que es una cosa muy distinta. Es decir, el ser argentino no es discriminatorio".

Pero no puedo olvidar —coincidiendo bastante con mi distinguida colega, la señora senadora por la provincia de Mendoza—, que han ocurrido hechos en el país que no pudieron ser sancionados.

Los viejos tenemos muchos recuerdos. En el año 1935 —muchos de ustedes no habían nacido— yo era estudiante del segundo año de medicina, y un sábado —justamente eligieron un sábado— los de la "Legión Cívica", los antecesores de esa alianza que está pegoteando y panfleteando permanentemente la calle Florida, con brazaletes negros llevaban en andas al decano de la Facultad de Medicina —a quien no nombro porque su muerte cierra mis labios—, y éste, levantando el brazo en alto, dijo que el día lunes no entraría ningún estudiante judío a la Facultad de Medicina. Eso no puedo olvidarlo.

Afortunadamente, todos los estudiantes no judíos apoyaron la decisión de lucha contra ese decano fascista y sus secuaces discriminatorios raciales y religiosos en la República Argentina. Yo tuve el altísimo honor de que los estudiantes de origen cristiano, los católicos y los musulmanes decidiesen que yo fuese líder en esa intención de que no ocurriese lo que había amena-

zado hacer el señor decano de la Facultad de Medicina en 1935.

Después de varios días de pelear en la calle Córdoba, frente a la vieja Facultad de Medicina, conseguimos destituir al decano. Era un brillante clínico y, por supuesto —yo sé que en la barra hay médicos—, uno de los clínicos que se vanagloriaba de que atendía a todos los judíos ricos de Buenos Aires. Pero su pasión fascista lo obligó o llevó a hacer esa manifestación.

Señor presidente: insisto en que la aprobación de este proyecto de ley va a servir para frenar a estos grupúsculos de inadaptados que buscan cualquier motivo para desestabilizar y, por sí acaso, consiguen un chivo emisario. ¿Y éste cuál es? El judío.

Sé cómo es el pueblo argentino, este pueblo que ha acogido a nuestros padres y abuelos que huían perseguidos de la Rusia zarista y llegaban amparándose en esta liberal Constitución Nacional de 1853, buscando paz y trabajo. Y lograron en las colonias de Entre Ríos, Carlos Casares y tantas otras vivir en paz, trabajar y educar a sus hijos, dejando de lado sus manifestaciones o profesando su religión amparados en la libertad de cultos que garantiza nuestra Constitución.

Pero se necesita una ley para que permanentemente no seamos agraviados y no lo sea la ciudadanía argentina. Observen que estos mismos que están viviendo a los "carapintadas" en la calle Florida, de paso utilizan *slogans* antisemitas; y no es casualidad. No pueden vivir en democracia, no han aprendido a hacerlo. Pero creo que con este proyecto de ley pondremos coto a estas manifestaciones racistas que debemos evitar se propaguen.

A veces uno tiene el deseo de decir: "No tiene importancia, es un pequeño grupo de inadaptados". Pero hay experiencia sobre eso. Así se empezó con Hitler en la Alemania nazi en 1933. La gran colectividad judía de Alemania decía: "¿Qué importancia tiene este pintor de brocha gorda, este analfabeto? Es un delirante; no va a pasar absolutamente nada". Bertold Brecht lo muestra muy bien de esta manera. "Claro, al principio fueron a buscar a los comunistas. Yo no soy comunista —dijo—, ¿qué me importa?" Después fueron a buscar a los masones. "Y a mí qué me importa? Yo no soy masón." Luego fueron a buscar a los judíos; y dijo: "Yo no soy judío." Y finalmente fue un genocidio contra todos los que no aceptaban la doctrina racista nazi."

Esto debe ser un ejemplo para no permitir que estos pequeños grupos sigan avanzando y nucleándose con banderas de victoria, porque al tiempo que utilizan esos eslogans buscan derrotar a la democracia, esa democracia que ha costado tanto conseguir en nuestro país.

Hace pocos días visité al secretario de Ciencia y Técnica, que lamentablemente se encuentra internado, afectado por una enfermedad pasajera. En esa oportunidad le comenté que se iba a tratar el proyecto de ley que Fernando de la Rúa había propuesto en el Senado y le manifesté, casi displicentemente, que me parecía que se nos iba la mano en algunos de sus artículos. Ante ello, él me recordó lo que acabo de señalar al cuerpo. "¡Cuidado con esos pequeños grupos, porque generalmente están apoyados desde adentro y desde afuera!".

Es por ello, señor presidente, que me congratulo de haber aprendido tanto esta noche y estoy seguro de que sancionaremos una norma legal que va a servir para la pacificación definitiva del país y para poder segregar a esos pequeños grupos que ya pueden vivir en libertad.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a ser muy breve a los fines de volver sobre un tema que con tanta minuciosidad y profundidad ha planteado mi colega y amigo el senador Juárez.

En ese sentido, creo que tenemos que aclarar la cuestión porque aquí no se trata de que yo lo convenza a él o viceversa, sino de que esto va a servir para interpretar el texto de la ley. Entonces, tenemos que dejar aclaradas algunas dudas que fueron planteadas, con toda legitimidad, por el señor senador Juárez.

A través de un análisis muy fino, el señor senador se preguntaba por qué cuando se incursiona o se hace alguna modificación en el campo civil se habla de temas o de casos discriminatorios que no figuran en el aspecto penal, dado que en lo civil se habla del sexo, de la posición económica y de los caracteres físicos, mientras que todos estos aspectos no figuran en el campo penal.

He dado mi respuesta, que no creo que haya sido refutada por la contestación brindada por el señor senador por Santiago del Estero. Considero que todos esos casos están perfectamente encuadrados —como dije— en el artículo 41 del Código Penal, en cuanto autoriza al juez a moverse dentro del espectro de la ley.

Los delitos que están contemplados en el Código Penal no tienen una pena fija sino que existe una escala. El juez se mueve dentro de esa escala y gradúa la pena de acuerdo con varios criterios determinados por el Código y con un parámetro muy claro, que está de acuerdo con la mayor o menor peligrosidad del que comete el delito.

El Código Penal le indica al juez cuáles son algunas de esas circunstancias. Le habla de las condiciones personales, de la calidad de las personas, de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestran una mayor o menor peligrosidad, y otras como la dificultad de ganarse el sustento propio, la participación en el hecho. Quiere decir que el espectro es muy amplio y el juez cuenta con esa facultad para desenvolverse.

Estimo que esa facultad le permite incluir casos como el tema del sexo y otras situaciones personales, como la educación. También le permite ubicarse en la escala penal de acuerdo con otras circunstancias como son la cuestión económica o la condición social.

Considero que lo importante es el grado de intensidad de la protección que persigue la ley. Tenemos que ver cuál es el bien jurídicamente protegido y cómo la ley extrema esa protección de acuerdo con las circunstancias del caso.

Aquí se habla, por ejemplo, del tema de la condición social. Me pregunto si por la condición social o por los caracteres físicos vamos a reprimir con pena privativa de la libertad. Aquí es donde debemos tener en cuenta que en el Código Penal lo que está en juego es la libertad del individuo. Entonces digo que aquí hay dos tipos de protección.

En los espectáculos públicos vemos que muchas veces la casa se reserva el derecho de admisión, y que si un ciudadano quiere entrar le dicen: "Señor, usted no va a entrar porque es negro, porque es feo, porque es pobre o porque no nos gusta su cara". Este es un tipo de discriminación que tiene un grado de protección en el artículo 1.071 del Código Civil.

¿Cómo protege la ley a esta persona? Le dice: "Señor, se va a dejar sin efecto el acto porque es discriminatorio y a usted le deberán reparar el daño moral y material causado". Ahí está la protección. Pero decir que a ese cuidador de cine o del espectáculo de que se trate se lo va a privar de la libertad porque no ha dejado entrar a una persona, es excederse en la protec-

ción del bien jurídico. No es que no tenga protección ni que no la merezca; son grados de intensidad en la protección de acuerdo con el tipo de falta que se cometa.

Por eso creo que debemos ser muy cuidadosos en separar las cosas, porque hay discriminaciones de distinto tipo. En verdad, como creo que se ha dicho muchas veces aquí, hay discriminaciones que inclusive no tienen ninguna sanción de la sociedad. Tenemos el caso, por ejemplo, de una chica que quiere entrar en una línea aérea y no la toman no obstante tener condiciones intelectuales suficientes, quizá por no ser agraciada, porque la naturaleza no la ha dotado de buenas condiciones físicas, o por no tener determinada estatura. Aquí se está ante una discriminación que sin embargo no tiene ninguna sanción. Se hace una selección y simplemente se dice: "Usted no ingresa." Pero demandar a la compañía o meter preso al encargado de seleccionar al personal creo que es un poco excesivo. Por eso tenemos que poner las cosas en su justo término.

Discriminaciones hay; algunas van a tener reparación por la vía civil y otras, que son las más graves, la tendrán por la vía penal.

¿Por qué nosotros queremos sancionar con la pérdida de la libertad este tipo de discriminaciones cuando se trata de razones de raza o religión? Porque realmente obedecen a una deformación, a una situación de alteración o de violación de la dignidad del ser humano. Por eso queremos dar una mayor protección y fijamos penas privativas de la libertad porque creemos que el hecho de pertenecer a una determinada raza, religión o nacionalidad no debe servir como excusa para discriminar.

Es cierto y admito lo que dijo el señor senador por Santiago del Estero en el sentido de por qué no se incluyen las cuestiones gremiales de la misma forma que se incluyen las políticas. Creo que la observación es buena, pero la solución no pasa por incluir el tema de las cuestiones gremiales sino por el de eliminar lo de las ideas políticas.

Yo pregunto cómo vamos a tener un agravio, por ejemplo, en el caso de una riña donde se pelean dos militantes de distintas líneas internas de un partido y no ya de uno radical y otro peronista. No creo que si mañana se pelearan "cafieristas" y "menemistas" en una riña se les vaya a agravar la pena. El juez va a graduar la pena de acuerdo con otras circunstancias y no

por el hecho de las distintas ideas políticas. Por eso entiendo que está bien esta observación, pero entonces tenemos que constreñir más los motivos por los cuales se va a calificar el agravio como de tipo penal.

Entonces para finalizar, señor presidente, y como el señor senador por Santiago del Estero me ha hecho una exhortación por mi condición de justicialista, de la cual me enorgullezco...

Sr. Juárez. — Le formulé la misma exhortación al señor senador de la Rúa.

Sr. Menem. — ...quiero señalar que la protección al trabajador está contenida en muchas otras leyes. He participado en todos los debates en los que se trataron leyes laborales. Hace poco fundamenté el porqué de la estabilidad absoluta del dirigente gremial, que creo que tiene basamento constitucional y que ha sido tan criticada.

La propia Constitución protege al trabajador; también está la ley de contrato de trabajo y la de asociaciones profesionales. Considero que contemplar en el Código Penal la protección del trabajador por su sola condición de obrero, o del patrón por el solo hecho de ser tal, constituiría un exceso en los propósitos de la norma penal, en los que está en juego la libertad del individuo.

Por lo expuesto considero que la distinción entre el aspecto civil y el aspecto penal está correctamente tratada. También estoy de acuerdo con que debemos restringir los motivos por los que se castiga penalmente la discriminación lo que, según mi punto de vista, debe limitarse —en este sentido la ley también hace docencia y debe hacerla—, a cuando se discrimina por razones de raza, nacionalidad, religión o por pertenecer a un determinado grupo étnico.

Por estas razones, y sin perjuicio de las observaciones que formularemos en el tratamiento en particular del proyecto, insisto en la posición sustentada anteriormente.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: éste ha sido un debate muy esclarecedor. Las brillantes intervenciones que hemos escuchado de los señores senadores han contribuido a la interpretación de los fundamentos de este proyecto e inclusive a aclarar algunos aspectos y advertir la

necesidad de corregir otros en la búsqueda de la perfección del texto legal.

Precisamente el esfuerzo por sancionar una ley de este tipo tropezó, cuando el Poder Ejecutivo envió en 1984 un primer proyecto a la Cámara de Diputados, con el problema creado por la inadecuada enunciación técnica de su texto y la dificultad para encontrar las fórmulas adecuadas de modo de cumplir el objetivo buscado sin incurrir en errores o deformaciones que desviarán al legislador del fin querido.

Considero que el debate va aclarando el camino en el sentido de observar la necesidad de volver al motivo fundamental de la norma que queremos dictar, que es sancionar los actos impulsados por odio racial o religioso, o sea la discriminación derivada de la perversión de diferenciación a los hombres entre sí por causas raciales o religiosas.

Lo que sucede es que desde el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y también en ocasión del estudio del que estamos considerando, se quiso avanzar en la reglamentación del principio de igualdad consagrado en la Constitución. Ya en el primer proyecto se hablaba de la igualdad y de las causas de su violación, no sólo raciales o religiosas sino por condición social, características físicas, ideas políticas, etcétera. Pero ese proyecto hacía bien en establecer estas desigualdades como causas de invalidación o, mejor dicho, preverlas como una prohibición genérica de violación del principio de igualdad sin trasladarlas a la parte penal, que es un aspecto distinto; reservaba la parte penal para castigar los actos inspirados por odio racial o religioso.

Al estudiar nuevamente aquellas proposiciones y elaborar este proyecto que ha tenido dictamen favorable de las comisiones, tuvimos en cuenta esos antecedentes y no quisimos apartarnos demasiado de ellos.

Sí debimos corregir lo que consideramos erróneo, pero tratando de mantener la estructura inicial de lo que ya había sido debatido en la Cámara de Diputados.

Por ese motivo y por considerarlo acertado y útil, hemos mantenido el artículo 1º que, precisamente, reglamenta el principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional. Sólo quiero recordar a los señores senadores cuál fue el texto que en su momento sancionó la Cámara de Diputados para que adviertan cuál es el alcance y la razón de ese artículo 1º del proyecto que estamos analizando.

Concretamente, se trata de una norma muy sintética y creemos que bastante precisa, que otorga asimismo el derecho a la protección jurisdiccional para los actos que impliquen discriminaciones arbitrarias que vulneren el goce de los derechos que la Constitución Nacional consagra, sobre la base del principio de igualdad.

Se condena cualquier tipo de desigualdad arbitraria. La segunda parte del artículo 1º que estoy mencionando se refiere especialmente a los actos discriminatorios por razones de raza, religión, nacionalidad, condición económica o social, ideas políticas, etcétera. De modo que en esta norma hay una protección del principio de igualdad establecido por la Constitución y que, aún sin norma legal específica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha protegido a través de numerosos fallos. De esta forma existirá una regulación que dé base a una vía procesal específica ante los tribunales correspondientes para la protección de estos derechos.

En consecuencia, el principio de igualdad contenido en esos dos breves párrafos del artículo 1º abarca los siete u ocho primeros artículos de la sanción de la Cámara de Diputados, que ingresó en el Senado en julio de 1985. Allí se establecía primero la nulidad de los actos administrativos y, en otra parte, se hacía referencia a la nulidad de los actos civiles proscribiendo la discriminación. Después se decía que la discriminación era legítima cuando respondía a diferencias razonables, fundadas en la limitación o restricción de ciertos derechos por razones de seguridad pública, defensa del orden, protección de la salud, etcétera.

Es decir, se avanzaba por un lado en la condena de la discriminación y se expresaba, por el otro la necesidad de consagrar excepciones. Por eso hemos querido sentar el principio general de un modo claro: toda diferenciación que implique una desigualdad para las personas, arbitrariamente impuesta por alguien, es contraria a la ley. Esta es la protección contenida en el artículo 1º del proyecto, que resume en sí todo lo que la Cámara de Diputados trataba de abarcar en los ocho primeros artículos de su sanción, a través de un texto que era muy difícil de reformular y que resultaba contradictorio en muchas de sus disposiciones.

Esta es la razón por la cual quiero llamar la atención sobre este artículo 1º, que implica una regulación específica válida para lo administrativo y lo civil, bien diferenciada de la otra parte del proyecto de ley referida a las cuestiones de índole penal.

Aquí sí, en lo relacionado con las normas penales, quiero expresar mi coincidencia con el señor senador Menem, en cuanto a que sería más conveniente formular una norma única de agravamiento de las penas para los actos delictivos cometidos con motivo de odio o persecución racial o religiosa.

También en este punto, al redactar el proyecto no quise apartarme demasiado de los antecedentes, que seguían el método de individualizar algunos delitos y, para ellos, agravar las penas cuando fueran cometidos por odio racial o religioso, como el homicidio, las lesiones, el incendio, la privación ilegítima de la libertad, las amenazas, etcétera. También fue incluido el delito de riña por la Cámara de Diputados, con la disidencia del diputado Cortese.

Es evidente, como ya se señaló, que hay otros delitos que también pueden cometerse por odio racial o religioso. El señor senador por Jujuy, doctor Martiarena, ya anticipó algunas de las propuestas que concretará oportunamente y que sin duda tienden a incluir otros delitos que pueden merecer el agravante cuando son cometidos por odio racial o religioso —el aborto, por ejemplo— o la instigación a cometer otros delitos —la asociación ilícita—.

Esto nos plantea también la necesidad de buscar una norma genérica que signifique un agravamiento de la pena cuando el delito sea cometido por persecución u odio hacia una raza, religión o nacionalidad. Al hacerlo así, resulta de toda claridad que hay que eliminar la referencia a ideas políticas, porque se agravarán las penas para todo tipo de delitos que respondan a aquellos específicos motivos. Lo de ideas políticas, en cambio, introduciría un elemento de confusión para situaciones como la del ejemplo planteado por el senador Menem. Al mismo tiempo, con la eliminación de "ideas políticas" damos respuesta a la aguda observación del señor senador por Santiago del Estero, quien se preguntaba por qué no incluir lo social junto a lo político.

Y queda claro que si uno incluye lo político y lo social termina abarcando toda la gama de posibles relaciones humanas. Siempre los hechos suceden entre personas y éstas ocupan distintas posiciones, un agravamiento de tales características acabaría siendo un agravamiento general de todas las penas del Código Penal, y aquí lo que queremos es sancionar específicamente los actos cometidos por odio racial o religioso o por la nacionalidad, que son hechos que la conciencia universal repudia y la moral de nuestra so-

ciudad también. Asimismo, respondemos de este modo a lo que establecen las convenciones internacionales.

Si bien no son hechos que ocurran en la generalidad de los casos, en nuestro país hemos vivido episodios que hacen razonable que por medio de una norma de este tipo se establezca una prevención eficaz contra la comisión de delitos de esta naturaleza.

A veces se dan por otros motivos. Vale la pena señalarlo para que tomemos conciencia clara de la norma que sancionamos. Hace muchos años, residía yo en Italia y se jugaba el Mundial de fútbol en Chile. Los chilenos vencieron a los italianos, pero según los "tifosi" italianos que seguían los partidos por la televisión, el árbitro había actuado injustamente favoreciendo a los chilenos que usaron de violencia contra los jugadores italianos. Fueron aquellos unos días de un clima terrible. Los chilenos, muchos de ellos compañeros nuestros de estudios, no se arriesgaban a salir a la calle porque el clima era de franca hostilidad, y si alguno era reconocido podía sufrir las consecuencias. ¿Obraría la calificante por nacionalidad?

Quiero advertir que este tipo de hechos, en ciertos casos, llega también a estar comprendido cuando por razón de nacionalidad se comete el delito, como podría ocurrir si llegara el caso de un enfrentamiento por un sentimiento de animadversión por esa causa.

Debemos ser conscientes de que esto también está comprendido, y al hacerlo de esta manera en la ley se está obrando conforme al principio de la universalidad de la humanidad y de que todos los hombres son iguales ante la ley en cuanto a la dignidad y el respeto que merecen, lo que es más claro en nuestro país, donde la Constitución extiende generosamente su protección a todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino.

Por eso, con los aportes hechos en este recinto, vamos a mejorar sustancialmente la ley. Tengo una breve modificación que proponer al artículo 1º, como anticipé en la sesión anterior, consistente en el agregado de la palabra "discriminatorios" después de "...actos u omisiones...", en el párrafo segundo.

Hay una corrección gramatical en el artículo 9º, que pasará a tener otra numeración.

Creo, como lo propone el senador Martiarena, que puede incluirse una norma que abarque la figura del genocidio. Pensaba —lo dije en una

sesión anterior— que esto merecía una ley especial, pero si encontramos la fórmula —y creo que es posible hacerlo— podemos incluir aquí mismo la figura, para que en una sola ley se cumpla con todas estas convenciones internacionales que ha suscrito nuestro país.

Creo que estamos dando un paso importante, y agradezco de manera especial a los señores senadores su intervención y la preocupación mostrada por este Senado en torno a este tema, en la convicción de que estamos mostrando, ante el pueblo argentino al que representamos y ante la comunidad internacional, que la vigencia de los derechos humanos y la exaltación de la dignidad de la persona, cualquiera sea su origen, es una preocupación de los legisladores y será una realidad en el derecho positivo argentino.

Sr. Presidente (Otero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a llamar para votar.

—Así se hace.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Otero). — Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: solicito que se deje constancia de que el proyecto ha resultado aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente (Otero). — Quedará constancia, señor senador.

En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Bravo Herrera. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Bravo Herrera. — Señor presidente: observo que en el segundo párrafo del artículo 1º se hace referencia a razones de sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Considero que en esto se va a caer en una cuestión subjetiva e incluso se corre el peligro de atentar contra la libertad en general.

No encuentro mal, por ejemplo, que en una oficina se tomen únicamente mujeres. Resulta simplemente que es una valoración que hace el empleador. Otro ejemplo puede referirse a los caracteres físicos. Yo no soy fumador, pero me

agrada ver la publicidad televisiva de cigarrillos en la que aparecen mujeres hermosas.

Me parece, pues, que esto daría lugar a discusiones completamente inconducentes, porque entra dentro del concepto general de discriminación, sin necesidad de hacer referencia a estas situaciones. Recuerdo, por ejemplo, que siendo yo presidente de una institución durante el gobierno justicialista, me encontré con que no se ascendía a una señora a gerente porque era mujer. Entonces, la ascendí. Fue un acto completamente callado, sin ninguna propaganda. En este caso sí había discriminación.

En síntesis, creo que no es necesaria la referencia al sexo, a la posición económica, a la condición social o a los caracteres físicos.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: en el curso del debate en general algunos señores senadores, y especialmente el señor senador por la Capital, miembro informante, incursionaron en diversos detalles del articulado sobre los cuales reservé mi intervención para el tratamiento en particular.

Tras estudiar este tema me permití hacer llegar a los presidentes de todos los bloques un memorándum en el que anticipo mis opiniones. Voy a pedir que este texto se tenga en cuenta en Secretaría para facilitar la exposición en cada uno de los puntos sobre los que voy a formular observaciones, sugerir o pedir modificaciones, o solicitar inclusiones, y se incluya en el Diario de Sesiones.

—El texto de la inserción es el siguiente:

Con relación al Orden del Día Nº 259 (prohibición y sanción de actos discriminatorios) cumpla en hacerlo saber que propondré las siguientes modificaciones y agregados, en el tratamiento en particular.

Artículo 1º — Su sustitución por el siguiente texto:

Será nulo de nulidad absoluta, todo acto público o privado, arbitrariamente fundado en discriminaciones relativas a las personas, o destinadas a producir las, por motivos de raza, color, sexo, creencias religiosas, nacionalidad, posición económica, condición u origen social, ideas políticas o gremiales, o caracteres físicos.

No se considerará que hay discriminación por nacionalidad, cuando la ley exige como requisito para ocupar un cargo o empleo público poseer na-

cionalidad argentina. Tampoco cuando el trato diferencial responda a necesidades de la defensa o seguridad de la Nación.

Cualquier persona podrá reclamar la nulidad del acto discriminatorio. Hasta que la misma sea declarada, también cualquier persona podrá solicitar la suspensión preventiva del acto.

Las acciones que correspondan podrán deducirse ante el juez civil competente, y tramitarán por la vía de amparo de los derechos que la ley tenga establecida.

En todos los casos, la nulidad del acto discriminatorio, dará lugar a la reparación del daño material y/o moral que haya ocasionado, pudiendo ser fijada equitativamente por el juez.

Art. 2º — (Artículo 80 inciso 4 del Código Penal): Agregar "o gremiales".

Art. 3º — (Artículo 95 del Código Penal): Suprimirlo.

Art. 4º — (Artículo 142 inciso 1 del Código Penal): Mantener también los "fines de venganza" a que se refiere el artículo 142 inciso 1. Agregar "gremiales".

Art. 6º — (Artículo 149 inciso 1 del Código Penal): En el apartado b) en lugar de "profrirerán", "se hicieren". Además agregar "gremiales".

Art. 8º — (Artículo 186 del Código Penal): Agregar "explosión o inundación". También agregar "gremiales".

Art. 9º — Agregar "gremiales".

Asimismo, propondré que se agreguen las siguientes normas al Código Penal:

Artículo 88 bis: Si el aborto se motivara por odio del agente hacia la raza, religión, nacionalidad o ideas políticas o gremiales de cualquiera de los causantes del embarazo, las penas establecidas en los dos artículos anteriores se aumentarían en un tercio.

Artículo 108 bis: El que sometiere intencionalmente a otro u otros a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial de la persona o del grupo a que pertenece, y lo hiciera por odio hacia raza, religión, nacionalidad o ideas políticas o gremiales, será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años.

Artículo 148 bis: Las penas establecidas en los artículos 146, 147 y 148, serán aumentadas en un tercio cuando los hechos previstos en esas normas se realizaran con el propósito de favorecer o efectuar el traslado del menor del grupo familiar al que pertenece por raza, religión, nacionalidad o ideas políticas o gremiales, y llevarlo a incorporarse a otro grupo diferente en alguno de esos sentidos.

Artículo 209: Agregar como segundo párrafo: "Las penas establecidas anteriormente serán aumentadas en la mitad de sus montos, si el delito que se instigare cometer fuere alguno de los que se describen en este código como motivados por odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas o gremiales".

Artículo 210: Agregar como párrafo tercero: "Las penas establecidas en los apartados anteriores serán aumentadas en un tercio, cuando los delitos a cometer fueren de los que se describen en este código como motivados por odio hacia una raza, religión, nacionalidad o ideas políticas o gremiales".

Saluda a usted atentamente.

José H. Martiarena.

Sr. Martiarena. — Entrando ahora en el artículo 1º, que nos ocupa, mi observación inicial se relaciona con la incorporación, por el dictamen de comisión, de este artículo como artículo 1.071 bis del Código Civil argentino. Voy a presentar una objeción de carácter jurídico principista, atendiendo a la naturaleza de este proyecto y a la regulación que los derechos tienen en nuestro ámbito jurídico.

Desde luego, es elemental, y no creo que valga la pena repetir la idea desarrollada por los autores y la jurisprudencia acerca de la división del derecho en público y privado, una división tradicional que incluye el Código Civil dentro del derecho privado. Esto ha dado lugar a una larga elaboración, pero podemos decir en síntesis, y sin penetrar más detalladamente en la parte doctrinaria, que hay unanimidad entre los autores en el sentido de considerar que el derecho privado se distingue del derecho público por la naturaleza de los derechos a que se refiere. En el derecho público el elemento predominante es el Estado y su actuación como órgano jurídico de la sociedad jurídicamente, constitucionalmente constituida, en tanto produce los denominados "actos públicos". El derecho privado está limitado a las relaciones que mantienen las personas entre sí en función del ejercicio de sus derechos particulares, sus derechos subjetivos, incluyendo al Estado cuando actúa como persona jurídica. Es decir que, en términos generales, el ámbito de aplicación del derecho privado, y sobre todo del Código Civil, es el de las relaciones entre las personas por razones de familia, propiedad, contratos, etcétera, que están perfectamente establecidas en los diversos libros del Código Civil.

Esto viene a cuento porque a mi entender, y también según lo expresado por algunos de los señores senadores que han hablado en esta sesión, el proyecto que estamos tratando tiene dos finalidades. En primer lugar, la protección frente a las discriminaciones que se puedan realizar en la órbita del derecho privado y, en segundo lugar, la protección a las discriminaciones que puedan producirse dentro de la órbita del derecho público. Es decir que ésta no es una ley para el Código Civil, sino que es de carácter general.

Toda vez que incluyamos esto en el Código Civil estaremos, en cierto modo, definiendo un ámbito de aplicación, que está constreñido por las circunstancias de que dicho Código no atiende lo que se refiere a las responsabilidades y a las relaciones que derivan de los actos del Estado en función pública.

Quiero poner algún ejemplo. Tal como está redactado este artículo, es decir, tal como está, incluido en el Código Civil este artículo propuesto por la comisión y por el senador de la Rúa, redundaría sin ninguna duda en que cuando un particular, en su relación con otro, pusiera una cortapisa, un obstáculo, que significaría una discriminación por la cual no se realizaría el contrato, lo frustrara o lo anulara o, de algún modo, se creara una situación discriminatoria, estaría bien esa inclusión.

Pero cuando en función reglamentaria, por ejemplo, el jefe de una oficina pública o, más precisamente, el jefe de un regimiento al que está incorporada —en orden de lo que trataremos después por la obligación del servicio militar— gente de toda extracción, dispusiera que los negros serían los que van a limpiar las letrinas y que no tienen ninguna otra función que cumplir. Eso sería un acto derivado de la función reglamentaria, que otras leyes le otorgan al que da o emite la orden. Entonces, éste constituiría un acto discriminatorio que no tendría nada que ver con la inclusión de un artículo en el Código Civil.

Estas manifestaciones que hago tienen como propósito buscar un mejoramiento y un sometimiento a una ortodoxia jurídica que, creo, no debemos perder de vista.

Reconozco —y es cierto— que hay un proceso, en algunas legislaciones y considerado por algunos autores, de lo que se denomina "publicización" del derecho civil o privado. Pero no es éste el caso la "publicización" del derecho

todo el capítulo de los contratos, extrayendo del Código Civil y del derecho privado el concepto de que es la voluntad omnimoda de las partes la que crea la obligación jurídica.

El derecho moderno admite que dentro del mismo Código Civil se incorporan instituciones que dan un carácter "publicista" —diría— a la relación entre las partes privadas. Pero este no es el caso; aquí debemos reconocer —lo hemos dicho y este es el sentido con que hemos votado en general y con el que está elaborado el proyecto— que queremos que esta ley rija para todos los casos de derecho público y privado.

Entonces, mi primera objeción es la de la inclusión como un artículo del Código Civil. Desde luego —aclaremos que esto no figura en los antecedentes ni en el proyecto del Ejecutivo, en el que caducó, o en el del diputado Cortese, que no se giró todavía— esto no está previsto con este sentido de incorporación al Código Civil sino como una ley fuera de ese contexto. Se trata de una ley especial, de una ley que viene a ser dictada porque responde a los principios de derecho constitucional e internacional público que se han establecido en convenios que he citado, en todos los cuales el gobierno argentino, al poner la firma, ha expresado su aceptación de que se dicto una legislación positiva interna para hacer efectivos los principios consagrados en el derecho positivo internacional.

De manera que se trata de una objeción a la que se podría tildar como de un purismo jurídico, pero espero que la comisión la considere porque tiene consecuencia que, aparte del ejemplo que he dado un poco improvisadamente, son las que resultan de la nulidad del acto.

Propongo que en lugar de este artículo 1º, que se incorpora en una forma análoga a la que se ha hecho con respecto al artículo 1.071 para los casos de violación del derecho a la intimidad —porque vendría a ser un artículo similar, acoplado también al 1.071 del Código Civil—, hagamos de esto una ley distinta.

Así está en el proyecto del Poder Ejecutivo, en el proyecto Cortese y en la sanción de la Cámara de Diputados que caducó en el Senado; como una ley autónoma, porque la naturaleza de esta ley obliga a que sea autónoma. Se va a considerar toda clase de actos.

Propongo una redacción que empieza diciendo: "será nulo de nulidad absoluta —ya he de explicar por qué—, todo acto público o privado".

Es decir, que debemos caracterizar que esto se refiere también a los actos públicos, a los abusos de poder cuando desde el poder público se hace una discriminación racial, por nacionalidad, etcétera.

El texto de la ley debe autorizar de manera expresa a fulminar esa decisión arbitrariamente establecida como discriminación con la nulidad, y ésta debe ser nulidad absoluta.

Sabemos que en el terreno de las nulidades —esto es un poco elemental; permítenme que haga esta referencia—, éstas pueden ser calificadas como absolutas y relativas. Las nulidades absolutas son las que se refieren a actos que no tienen ninguna validez, como si no hubieran nacido. Hay algunos que hablan de la inexistencia pero nosotros, dentro del lenguaje de nuestras leyes y códigos, debemos hablar de nulidad absoluta.

Un acto discriminatorio del poder público o de la relación privada entre dos personas será nulo de nulidad absoluta por imperio de la ley, porque estamos obligados a eliminar las discriminaciones en la ley interna, y las rechazamos diciendo que los actos públicos o privados que arbitrariamente crean discriminaciones son nulos de nulidad absoluta.

Ho dicho "arbitrariamente" —y lo hago también en el texto del artículo que propongo— porque puede haber actos que no sean arbitrariamente discriminatorios. Por ejemplo, la propia Constitución Nacional establece que para ser presidente de la República hay que profesar la religión católica, o alguna ley que estableciera circunstancias o condiciones especiales para llegar a ejercer un cargo público, lo cual no sería discriminatorio si se hace atendiendo a la calidad nacional de la persona que debe ser designada.

De modo que no estoy de acuerdo con que simplemente se incorpore este artículo al 1.071 bis. Y creo que debo diferir sobre las circunstancias que se han incorporado.

Esto de incorporar al artículo 1.071 tiene un sentido y una explicación; y permítenme que haga un poco de relato sobre el particular.

Al incorporarse como artículo 1.071 bis la cuestión relacionada con la protección del derecho a la intimidad —es obvio de toda obviedad que se trata de cosa totalmente distinta—. No puede suponerse que un acto público, una ordenanza, un reglamento, etcétera, vayan a entrometerse en la vida ajena, o la publicación de retratos o algunas de las circunstancias que

en ese artículo se establecen. Era lógico, entonces, que en cuanto a la protección de la intimidad al artículo 1.071 bis estuviera inscrito y acoplado en el Código Civil.

No pasa lo mismo con esto que tratamos, porque hay, repito, actos públicos y privados.

En cuanto a la historia del artículo 1.071, Vélez Sarsfield lo redactó diciendo que el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de un deber legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Esto implicaba un enérgico repudio a la teoría del abuso del derecho, que en nuestro Código Civil se atemperó porque también Vélez Sarsfield había incluido el artículo 953 por el cual esblecía que el objeto de los actos jurídicos no deben ser hechos contrarios a las buenas costumbres o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia.

En base a este artículo 953 la jurisprudencia argentina hizo una elaboración que permitió introducir la teoría del abuso del derecho y fulminar los actos celebrados entre partes que de algún modo afecten las buenas costumbres los que, entonces, constituyen abusos de derecho.

Cuando se incorporó al artículo 1.071 lo relativo a la protección del derecho a la intimidad recuerdo que en el debate producido en la Cámara de Diputados —del cual participó al momento de informar nuestro actual secretario parlamentario— encontré razonable y lógico que tuviera esa ubicación, pero no creo que debamos insistir en esta forma de planteo, sobre todo cuando los antecedentes han sido estudiados con el propósito de hacer una ley que no merezca objeciones y esto no fue puesto como una incorporación a algún artículo del Código Civil sino como una norma autónoma.

Por otra parte, quiero significar, además, que esta inclusión en el Código Civil, por mucho que hagamos una manifestación diciendo que se refiere a toda clase de actos, puede dar lugar a que en algún caso muy especial quien valore el principio de la no discriminación se ampare diciendo que esa no es una relación de derecho privado sino de derecho público y que no corresponde la aplicación de esta norma. Con ello se crearía una situación conflictiva.

La ley tiene que ser lo más clara posible y debe estar orientada al logro de su propia finalidad. En el artículo que propongo en reemplazo del 1º digo directamente "Será nulo de nulidad absoluta todo acto público o privado arbitrariamente fundado en discriminaciones relativas a las personas o destinadas a producir las", porque son

dos situaciones. Puede haber un acto que nace discriminatorio, o que sea aparentemente no discriminatorio pero que produce una consecuencia discriminatoria. La ley debe prever esa situación.

Agrego, además, "por motivos de raza, color, sexo, creencias religiosas, nacionalidad, posición económica, condición u origen social, ideas políticas o gremiales o caracteres físicos". Voy a explicar por qué hago esa enumeración en este artículo, que es el definitorio, genérico de la definición que vamos a dar: porque así está expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 2º expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole —no dice "gremial", pero dice "cualquier otra índole"—, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Esto lo hemos firmado nosotros en el ámbito internacional. Nos hemos obligado y comprometido a que este sea el sentido de la ley antidiscriminatoria que para el derecho positivo interno vayamos a dictar. No podemos entrar en una contradicción.

Se podrá cuestionar subjetivamente esto de la posición económica o de la condición u origen social o ideas políticas o gremiales o de los caracteres físicos. Pero esto significará que cuando se presente una situación de este tipo será el juez el encargado de establecer si realmente hay una discriminación por alguno de estos motivos en el caso concreto que se dé.

El proyecto de ley enumera todo lo que la Convención de los Derechos Humanos fija. Nosotros adoptamos el mismo temperamento e igual lenguaje.

Con relación al aspecto de las ideas políticas, yo agrego "o gremiales". Lo hago por dos motivos. Primero, porque en la Declaración Universal de Derechos Humanos dice "opinión política o de cualquier otra índole" y segundo porque en la discusión en la Cámara de Diputados este fue un tema en el que se hizo especial hincapié. En la proposición del señor diputado Pepe, que es gremialista y compañero nuestro, se definía la necesidad de dejar aclarado que así como puede haber discriminaciones por motivos políticos también puede haberlas por motivos gremiales.

En una ley sancionada en la época de la presidencia de Illia se recogieron algunos de estos principios y se incluyeron motivos de lucha ideológica.

lógica, racial, etcétera, y de lucha de clases. Ello provocó un importante debate en la Cámara de Diputados. Presidía la comisión respectiva un antiguo senador y gran compañero nuestro, primero radical y luego peronista, Armando Caro, que manejaba el derecho penal con bastante fluidez; se había consultado con Jiménez de Asúa, con el profesor Soler y el profesor Núñez. Las opiniones fueron diversas, pero en definitiva se optó por no incluir en esa oportunidad la lucha de clases por el argumento expuesto por Jiménez de Asúa, en el sentido de que si se lo hacía podía parecer un enfrentamiento y la eliminación de la clase de los empresarios, o a la inversa, y esto podía traer una gran confusión en la aplicación de la ley. Pero se mantuvo lo relativo a las ideas políticas o gremiales.

Estimo que hay que aclarar esto que ya anticipé con respecto a la discriminación por nacionalidad, es decir, cuando la ley exige como requisito para ocupar un cargo público poseer nacionalidad argentina. Este es un derecho que surge del ejercicio de la soberanía. Nuestro país tiene derecho a decir que para tal función solamente se admite a un argentino. Entonces, nadie puede quejarse y decir que se está ante un acto de discriminación. Pero esto hay que fijarlo expresamente porque como decimos todo lo anterior el señalar esto haría aparecer que estamos estableciendo una excepción al principio de la discriminación. Tampoco podrá quejarse nadie cuando el trato diferencial responda a la necesidad de defensa o seguridad de la Nación.

Se ha dicho bien en el debate en general que no se pueden establecer las excepciones contenidas en la sanción de la Cámara de Diputados, las que en realidad constituían una desvirtuación del principio general. Aquí recogemos únicamente las necesidades de defensa o seguridad de la Nación. Es obvio que si el país se encuentra frente a un conflicto armado —de lo que vamos a hablar en la otra instancia de esta sesión—, se exigirá que los ciudadanos que actúan en determinadas esferas sean únicamente argentinos. Como en ese caso estaría en juego la seguridad de la Nación y el interés fundamental de la defensa nacional, es natural que esto se tenga en cuenta.

El proyecto que estamos considerando, siguiendo la línea argumental del artículo 1071 bis, que incorporó la protección a la intimidad, dice que "... [quien] de algún modo menoscaba el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pe-

dido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio...". Y agrega equivocadamente: "...o cesar en su realización...", lo que ya fue criticado por la doctrina.

Dada la naturaleza del tema que tratamos, me parece que el derecho a pedir o a reclamar la nulidad del acto no puede derivar solamente del afectado en forma personal ya que éste es un derecho que pertenece a cualquier ciudadano de la colectividad. Si se entra en conocimiento de que desde el poder público o en el contrato privado de una empresa se ha cometido un acto de discriminación, en defensa del principio fundamental de la no discriminación consagrado en convenios internacionales y en nuestra legislación positiva, puede ocurrirse ante la vía correspondiente y decir que ese acto del que se tiene conocimiento es nulo de nulidad absoluta. Entonces, propongo que se incluya que cualquier persona podrá reclamar la nulidad del acto discriminatorio. Se podrá decir que existe una especie de contradicción entre esto y el principio que dice que es nulo de nulidad absoluta, pero para que el acto sea declarado tal existe un espacio de tiempo durante el cual el acto puede tener vigencia y aplicación; entonces, cualquier persona puede pedirle a un juez que declare la nulidad de dicho acto discriminatorio.

Más aún: hasta que la nulidad absoluta sea declarada —en ciertas circunstancias aun este tipo de nulidad debe ser declarada— cualquier persona podrá solicitar la suspensión preventiva del acto, que es lo que se ha querido prever cuando se dice "...o cesar en su realización...".

No estoy de acuerdo con que la expresión idiomática esté fuera de lugar; estimo que "...dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su discriminación...", debe ser más preciso en el sentido de que debe ser nulo de nulidad absoluta y que cualquier persona podrá solicitar la suspensión preventiva del acto.

Esto nos lleva a que debamos establecer cómo deben ejercitarse las acciones. Las acciones que correspondan podrán deducirse ante el juez civil competente y tramitarán por la vía de amparo de los derechos que la ley haya establecido en el orden nacional y provincial. Existen jueces a los que se encomienda la tramitación del recurso de amparo; dichos jueces son los que debemos declarar idóneos para entender en la aplicación de esta ley cada vez que exista una violación del principio de la no discriminación.

Con relación a la reparación de daños el proyecto establece "...y a reparar el daño moral y

material ocasionados". Mi proposición, que no es solamente semántica sino de fondo, es la siguiente: "En todos los casos, la nulidad del acto discriminatorio, dará lugar a la reparación del daño material y/o moral que haya ocasionado, pudiendo ser fijada equitativamente por el juez".

Reconozco que he tomado este último párrafo del artículo 1.071 bis del Código Civil que protege el derecho a la intimidad. Puede suceder que no exista una prueba fehaciente y terminante del daño ocasionado o sufrido; entonces, debe abrirse en la ley el camino de la equidad, esto es, autorizar al juez a que equitativamente pueda fijar una indemnización que naturalmente quedará librada a su criterio y razonabilidad.

En cuanto a las ideas políticas y gremiales, la sanción de la Cámara de Diputados al considerar el agravante del homicidio, artículo 80, inciso 4º, del Código Penal hace alusión precisamente a ello. Al respecto quiero agregar algo que se me pasó en ocasión de referirme a esto. Quise anticipar a mis colegas este texto pero no tuve el tiempo ni la forma de hacerles llegar una explicación puntual al respecto y no estoy en condiciones de hacerlo. No soy un especialista en la materia; soy un abogado que en cierto modo improvisa con su criterio y sentido común frente a las necesidades que debemos afrontar al sancionar una ley de este tipo. Espero que las razones que he dado convengan a mis pares de que no tenemos que hacer de esto un artículo del Código Civil.

Más aún: quiero hacer notar que en el proyecto que está radicado en el Senado acerca de la unificación de la legislación civil y comercial —y respecto del cual hemos autorizado la constitución de una comisión—, el artículo 1.071 actual se expresa con el siguiente agregado: "En su caso, el juez proveerá lo necesario para evitar sus efectos abusivos y, según las circunstancias, procurará la reposición al estado de hecho anterior y fijará una indemnización". Quiero señalar que si nosotros sancionamos el proyecto como ha venido de Diputados, con la unificación de la legislación civil y comercial en ese aspecto, no estaríamos considerando en el Código Penal esta cuestión de la discriminación porque ya estaría inserta en un artículo del Código Civil. Entonces, se abren dos alternativas: o prescindimos de esta modificación o devolvemos el proyecto de ley a la Cámara de Diputados tal vez sólo por este único motivo.

No creo que lo que haya dicho agote el tema, pero espero haber llevado a la inquietud de los señores senadores que éste es un asunto en el cual, por nuestros compromisos internacionales y

por nuestra adhesión al resguardo de la dignidad humana que estamos buscando con esta iniciativa, no podemos realizar una simple inclusión en el Código Civil sin que ello requiera una ley especial. Esto es así, máxime cuando éste es el único artículo de orden general, dado que los otros caen en el casuismo de los artículos del Código Penal, cuya modificación vamos a proponer. Esta es la norma clave y fundamental de este proyecto de ley pues define qué es lo que quiere el Congreso argentino en esta materia.

Sr. Presidente (Otero).— Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Juárez.— Señor presidente: acabo de escuchar con una concentrada atención la medulosa y minuciosa exposición del señor senador por Jujuy.

Anticipo mi absoluta adhesión a su criterio con respecto a esta norma. Sus opiniones han sido demasiado explícitas como para que yo me permita abundar en mayores consideraciones que las que él ha enunciado en forma tan clara y detallada.

Simplemente, quiero adherirme a la observación que formula, en el sentido de que lo propuesto limita el alcance de ese dispositivo, inspirado en un generoso propósito para asegurar al máximo la igualdad ante la ley, más allá de las creencias religiosas o de las condiciones raciales.

Ha dicho con acierto el señor senador por Jujuy que incorporar ese dispositivo al artículo 1.071 del Código Civil entrañaría una limitación a sus alcances y a la intención del legislador en cuanto a la extensión que queremos darle a ese contenido tan vindicativo, podría decirse, de la dignidad e igualdad humana.

Sobre este tema quiero hacer una pequeña reflexión. Es exacta la división que ha hecho en forma lúcida entre el derecho público y el derecho privado. También es exacto que si nosotros incorporásemos esta norma al Código Civil, la estaríamos insertando dentro de una cápsula que va a funcionar exclusivamente en esa área del derecho privado y, sin embargo, ésa no es la intención. No solamente no lo es sino que también me animaría a decir que el área más propicia para las violaciones discriminatorias que se tratan hoy de evitar es especialmente la del derecho público y, particularmente, el ámbito del derecho administrativo. Precisamente, es allí donde se pueden verificar con mayor frecuencia ese género de discriminación.

Voy a dar un ejemplo para ilustrar mejor el caso. Se abre una licitación y ella es ganada por una firma inserta dentro de un contenido racial. El poder administrador, bajo excusas quizás deleznales, puede no adjudicar esa obra dejándose llevar por sentimientos antirraciales. Esto puede ser factible, sobre todo en el área del derecho administrativo, donde se tramitan tantos intereses que se mueven multifacéticamente en el área del poder administrador. Y si esto se diera —ese acto de agresión a la igualdad, ese acto discriminatorio—, los responsables estarían exentos de sanción si nosotros la incorporáramos dentro del código civil. Sería —valga la expresión neológica— de “aplicación inaplicable” dentro de la esfera del derecho administrativo.

Es por eso que comparto la opinión del senador por Jujuy; es decir que tiene que darse a esta norma un contenido independiente, autónomo, fuera del ámbito recluso y limitado del Código Civil.

Sintéticamente, ésta es la expresión con la que yo uno mi adhesión y mi voto favorable a la modificación propuesta por el senador por Jujuy de que no se incorpore al Código Civil, para darle un ámbito de vigencia menos restrictivo, menos limitado, y asimismo también comparto la declaración que él insinúa en su moción de declarar a este acto nulo de nulidad absoluta; me atrevería a complementarlo diciendo que es de nulidad absoluta y de pleno derecho, que es una forma y un modismo que le da más vigencia autonómica a punto tal que la nulidad de pleno derecho incluso puede ser declarada de oficio por el juez, sin petición de parte.

De ahí entonces que esté absolutamente persuadido de que las ideas básicas —las dos fundamentales que rescato de la brillante exposición del senador por Jujuy, las dos ideas rectoras, directrices: que no sea incluida en el Código Civil y que se declare el acto nulo de nulidad absoluta con el agregado que me he atrevido a hacer, de pleno derecho— contribuirían a ajustar la intención, la vocación y la filosofía que nosotros deseamos imprimir a este articulado.

Simplemente quiero ratificar mi posición con respecto a estos dos principios, sin perjuicio de lo cual también me parece muy adecuada la modalidad inserta dentro de la propuesta del senador por Jujuy de insinuar o perfilar el trámite a seguir precisamente para la declaración, en su caso, de la nulidad absoluta.

17 de abril de 1938

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2965

No voy a la
por y tam-
lla que reg-
de los r-
mares: ar
tenci ya ha
de

quiero abundar más en consideraciones que la exposición ha sido sumamente detallada y no estoy en condiciones de complementarla con un aditamento ideológico más lo que él ya ha mencionado.

Sí digo que es evidente que no podemos limitar el efecto de esta ley circunscribiéndola dentro del campo del derecho privado. Además, más allá de esta declaración que se propone en el proyecto y que se refiere a dejar sin efecto el acto discriminatorio a pedido del damnificado, es mucho más contundente, más eficaz, más clara y más rotunda la expresión de declarar el acto nulo de nulidad absoluta y de pleno derecho, porque se le quita toda posibilidad de haber tenido un efecto válido en algún instante de su dinámica creadora. Es decir, es un acto —como decía recién el señor senador— considerado inexistente; y lo que no existe, en derecho no puede causar efecto jurídico alguno. Por ende, es muy acertada la sugestión de esta declaración de acto nulo de nulidad absoluta, y yo diría, también, de pleno derecho.

Sr. Presidente (Otero).— Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa.— Señor presidente: realmente es importante este debate por la jerarquía de las exposiciones y el dominio del tema por parte de los intervinientes —en algunas cosas coincidimos, en otras no—, lo que me obliga como miembro informante a responder seriamente a las observaciones formuladas.

Quiero recoger primero lo que ha planteado el señor senador Bravo Herrera, quien considera que la segunda parte del artículo puede significar un exceso que atente contra la libertad de decisión de algunas personas. Quiero decirle a él y a cualquiera que más adelante deba leer e interpretar esta ley, que esa segunda parte del artículo 1º no puede entenderse sino en función y con relación a la primera parte que contiene el concepto de la arbitrariedad para la negación de los derechos constitucionalmente acordados en condiciones igualitarias a todas las personas. Es decir, no es cualquier desigualdad sino la diferenciación arbitraria violando la igualdad ante la ley de los derechos consagrados en la Constitución.

Y como esto es importante para la interpretación futura de la norma, quiero señalar que ella protege a toda persona física cuyos derechos y garantías constitucionales se vean menoscabados, esto es que la persona o su grupo sea puesta o considerada en situación de infe-

rioridad. Ello puede ocurrir por caracteres o por razones que provengan de la persona misma y que son inseparables de ella, como el sexo, la edad, la raza o algunas condiciones físicas; por caracteres que la persona pueda eventualmente modificar, tales como la condición social y económica, pero que no dependen exclusivamente de su decisión; o por otros que la persona puede cambiar, como la religión o las ideas políticas, pero que no pueden ser objeto de presiones externas que vayan contra su libertad de conciencia.

Los seres humanos necesariamente hacemos distinciones respecto de otros seres humanos, desde elegir al cónyuge, los amigos, los socios, los educadores a quienes confiamos nuestros hijos, las personas bajo quienes o con las que hemos de trabajar o han de hacerlo para nosotros. Este es un ámbito lógico y natural en el que ejercemos nuestros derechos constitucionales a enseñar y aprender, trabajar, practicar el culto y asociarnos con fines útiles.

En cuanto al Estado nacional, provincial o municipal, éste no puede distinguir arbitrariamente. Y ello surge con claridad de la Constitución de la Corte Suprema de que deben ser tratados del mismo modo los que se encuentran en igualdad de condiciones siempre que no existan distinciones arbitrarias u hostiles o que impliquen indebido favor o privilegio. En la legislación el Estado debe promover la igualdad removiendo aquellos obstáculos que la impiden.

El artículo propuesto, por consiguiente, como uno de los destinatarios al Estado, frente al cual el particular puede esgrimir el derecho que aquí se consagra, si media una discriminación o si es puesto en inferioridad de condiciones por motivos de raza, sexo, etcétera, cuando la conducta sea motivada exclusiva o determinantemente por ello.

Destacamos aquí el elemento de razonabilidad, que puede decirse que es la regla de oro. Si el Estado discrimina por razón de raza o credo, evidentemente está menoscabando derechos y no es posible decir que se ha actuado razonablemente.

En cambio, la nacionalidad, los caracteres físicos o el sexo no alarmarse podrían ser susceptibles de una aplicación razonable. Así, es razonable que se exija ser varón para ingresar al Colegio Militar o tener determinada altura para pertenecer al Regimiento de Granaderos a Caballo, o ser argentino nativo para acceder a la Presidencia. Siguiendo el razonamiento dado

En su momento por el Poder Ejecutivo, hay relaciones funcionales, y aquí es donde entra la razonabilidad, justificando casos que no son discriminatorios, es decir, a los cuales no se refiere esta norma. Pero ciertamente, si por su religión, sexo o raza un empleado público se ve postergado en un ascenso, la administración está discriminando arbitrariamente, como lo está haciendo cuando exige sin razón para determinados empleos la ciudadanía argentina, requisito que puede, en cambio, ser razonable en otros casos.

La no discriminación debe ser la regla asimismo para el ingreso a y goce de locales de acceso público, como ser un teatro, un parque. El Estado debe remover los obstáculos que impidan el goce igualitario, precisamente porque son de acceso público y negarlo a una categoría determinada estaría menoscabando a esa categoría. Siempre están los límites puestos por la moral y las buenas costumbres, que es el tamiz que habrá de utilizarse, y aquí sí se podrá y deberá distinguir.

La cuestión es más compleja en el ámbito de los seres humanos debiéramos ser racionales, debiéramos carecer de prejuicios, deberíamos eliminar las discriminaciones que habitan en nuestro interior. Pero no podemos exigir a los hombres por ley del Con-

pertenecentes a un determinado culto; me parece que el Estado jamás podría en sus propios estatutos incluir tales recaudos.

La norma no pretende una igualdad absoluta entre los habitantes ni obligar a todos a actuar como si tal igualdad existiera. Si pretende reparar o prevenir el trato desigual intencionado, agravante, que implica un menoscabo a la dignidad de la persona cuando se la excluye de determinado beneficio al que tenga derecho, exclusivamente por raza, sexo, nacionalidad, etcétera.

El límite, nuevamente, está dado por el adecuado equilibrio de la Constitución: el artículo 19 consagra la libertad de las acciones privadas, mientras no afecten la moral pública y los derechos de terceros. La libertad de asociarse, contratar, etcétera, implica la de poder elegir con quién se trabaja, contrata, etcétera. Pero los derechos de terceros, no menos que la moral pública, estarán en juego cuando por un ejercicio abusivo de esos mismos derechos se causa un perjuicio mediante hostigamiento, hostilidad, menosprecio a otro por las razones que señala la norma.

Con este artículo no se pretende suscitar conflictos artificiales, ni tampoco se cree que tenga un efecto mágico, como si estuviéramos movidos por un voluntarismo.

Pero si creemos que la norma tiene una función docente, frente al Estado y para los particulares en las relaciones sociales. La ley habrá de cumplir esta función, orientando, creando conciencia, señalando valoraciones éticas, y dándoles facultades a los jueces para corregir desviaciones y deformaciones que pudieren ocurrir.

Me he permitido leer esta síntesis, que puede servir para la interpretación del proyecto, para aclarar las dudas del señor senador Bravo Herrera, y anticipar algunas respuestas a lo que ha expresado el señor senador por Jujuy con la adhesión del señor senador por Santiago del Estero.

El señor senador por Jujuy plantea la necesidad de suprimir la inclusión de esta norma a continuación del artículo 1.071 bis del Código Civil. Voy a coincidir con su propuesta, aunque no por las razones que ha dado.

La inclusión de la norma en el Código Civil no la hace necesariamente de carácter privado ni le quita las repercusiones de carácter público que pueda tener. Precisamente, el derecho a la intimidad consagra en el Código Civil una pro-

tección a la intimidad respecto de los particulares y, también, del Estado. El Código Civil contiene regulaciones al dominio público, al uso de los ríos, a la situación de las playas, a los mares; habla de las personas jurídicas de existencia necesaria, y contiene normas de aplicación de carácter público.

Por eso no es ésta la razón que me preocupa; la naturaleza de la norma debe encontrarse en su esencia, en su contenido, no por su inclusión en un código. Esta referencia al Código Civil no priva a la regla de efectos para proteger a los ciudadanos frente a las arbitrariedades discriminatorias en que puedan incurrir el Estado o los funcionarios públicos. Pero sucede que, personalmente, tengo una natural prevención para introducir modificaciones aisladas en los códigos, que son estructuras fundamentales en la organización jurídica de la sociedad.

Hay que tener mucho cuidado para modificar los códigos; esas leyes que, a veces, ocasionalmente, cambian un artículo o inciso de un código, perturban la fácil comprensión de la ley, fundamental para que los ciudadanos, conociéndola, la cumplan mejor.

Por esta razón, señor presidente, incluso porque vamos a reformar la parte del proyecto que contemple el agravamiento de penas y, en lugar de modificar los artículos del Código Penal, vamos a poner —de acuerdo con lo expresado por el señor senador Menem, con quien coincido— un solo artículo agravando las penas para todos los delitos penales cometidos por esta motivación específica, creo que es mejor que esto quede como una ley especial, sin modificar los códigos.

De manera que le adelanto complacido al señor senador por Jujuy, en mi carácter de miembro informante, mi coincidencia en el sentido de suprimir la referencia al artículo 1.071 del Código Civil.

La coincidencia, en cambio, no existe en cuanto a los otros puntos. Hemos meditado mucho sobre esta norma, que es difícil porque es central. Hemos creído haber alcanzado una fórmula clara y de buena calidad técnica para expresar lo que se quiere.

El señor senador por Jujuy reclama que se declare la nulidad del acto; y voy a decir por qué nos hemos apartado de la institución de la nulidad, por qué no hablamos de ella. Hay una razón esencial. El señor senador sabe —el Código Civil se ocupa de ello— que hay hechos

y actos jurídicos; existen acontecimientos, conductas, que no revisten la jerarquía de actos y que, en cambio, son hechos. Nosotros queremos que el juez tenga facultad para hacer cesar también los hechos que, por ser ilícitos, no revisten el carácter de actos jurídicos y que no sea necesario aguardar a la declaración de nulidad absoluta de un acto, declarándolo inexistente, porque siempre hará falta una declaración judicial. El problema es a dónde o a cuándo se retrotraen los efectos.

Pero puede haber hechos que el juez puede hacer cesar. Por eso se dice aquí que el juez deberá dejar sin efecto el acto discriminatorio o hacerlo cesar en su realización. Así nos apartamos de la idea de la nulidad, para dejar que el juez resuelva si en virtud de la prohibición se produce la nulidad del acto cuando corresponde.

No hace falta entrar a elaborar una ley especial, una teoría de las nulidades, cuando eso ya está en el Código Civil. Según el artículo 953, son nulos los actos prohibidos por la ley o contrarios a la moral y a las buenas costumbres. No hace falta que digamos que el acto es nulo cuando ya el Código Civil lo establece. Desde luego, en materia de derecho público un acto prohibido por la ley y contrario a la Constitución es nulo de toda nulidad en el plano del derecho administrativo. Así que esto no es necesario desde ningún punto de vista.

El señor senador por Jujuy propone también que se diga: no sólo actos de discriminación relativos a las personas sino también actos destinados a producirla. Es decir, creo entender, que se refiere también a actos que no hayan alcanzado a producir la discriminación sino que pueden producirla más adelante; el acto no ha producido su efecto sino que es potencialmente discriminatorio.

Me parece que la observación es muy sutil y creo que la norma comprende todo. Se refiere a "quién arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional...". Como vemos, la norma es amplia.

* Pero tiene que haber un derecho afectado; no se puede consagrar una declaración teórica o abstracta sino que se trata de defender el derecho de alguien que se pueda ver menoscabado o en peligro frente a un acto discriminatorio, actual o potencial, pero afectando un de-

recho cierto. Por eso, me parece que el agregado no va a cambiar las cosas.

Respecto de la enumeración que propone el señor senador, que toma en cuenta la Carta de los Derechos Humanos, yo tengo aquí también la Convención de San José de Costa Rica de 1969 y a la vista la enunciación hecha por la Cámara de Diputados. Creo que coincidimos de una u otra manera; está dicho lo mismo.

La sanción de la Cámara de Diputados toma en cuenta el Pacto de San José de Costa Rica pero no lo sigue a la letra. Nuestro texto toma en cuenta todo eso; no lo sigue a la letra, pero todo está contenido. Y lo que el señor senador propone tampoco lo sigue a la letra y tiene el mismo contenido que nosotros venimos proponiendo.

Sólo hay un agregado, que es el de las ideas gremiales. Cuando en el texto nosotros hablamos de ideología o de opinión política entendíamos que esto estaba comprendido. No vamos a excluir nosotros una discriminación de ese tipo. Pero básicamente hay que tener en cuenta que lo gremial no es una estructura autónoma dentro del conjunto de las conductas y nos parecía que al hablar de ideología o de idea política eso estaba perfectamente comprendido.

De todos modos, yo no tengo inconveniente en que se haga referencia a ideas políticas, opinión política o gremial si esto aclara mejor el alcance y sobre todo para ahorrar la renovación de la misma discusión en la Cámara de Diputados, donde se plantearía seguramente si no lo incluyéramos.

Pese a ello, quiero señalar que en la sanción de la Cámara de Diputados que llegó al Senado en 1985, al enunciar en el artículo 2º los motivos de discriminación o de posibles discriminaciones, no se hacía alusión a los gremiales. Simplemente se decía: opinión política u otra cualquiera, como más o menos se expresa en el texto de la Convención de San José de Costa Rica. Esta se refiere a opiniones políticas o de cualquier otra índole. En la sanción de la Cámara de Diputados lo gremial figura únicamente en el artículo 5º; al referirse a la discriminación con motivo del ingreso o permanencia en calidad de miembros o usuarios de clubes, institutos educativos, asociaciones o sociedades, se decía por razones de raza, nacionalidad, religión, sexo o ideas políticas, sindicales u otras acciones privadas, caracteres físicos, etcétera. No sé por qué se agregaron las ideas sindicales.

Información Parlamentaria

cales al regular el ingreso a clubes o asociaciones.

Sr. Martiarena. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. de la Rúa. — En seguida, señor senador. Le quiero explicar el motivo de no haberlo incorporado expresamente. Al cotejar los antecedentes esto no estaba y nos pareció implícitamente incluido.

Sr. Martiarena. — Estaba expresamente establecido como "sindicales" en la modificación del artículo 80 inciso 4) del Código Penal.

Sr. de la Rúa. — Sí, pero esto es otra cosa. Estamos discutiendo el artículo 1º, y respecto del Código Penal vamos a hablar no de ideas políticas o gremiales, sino de persecución u odio racial o religioso.

Aclaro que, en definitiva, hay prácticamente una coincidencia y, por mi parte, acepto la inclusión de lo relativo a ideas políticas, opinión política o gremial, agregado a la segunda parte del artículo 1º tal como está redactado.

El señor senador propone también que para este tipo de episodios se conceda la acción pública, es decir que cualquier persona pueda reclamar la nulidad del acto discriminatorio.

No sé si el señor senador ha reparado en la gravedad que esto tiene, ya que significaría convertir en públicos los derechos privados, el de una persona a hacer valer su propio derecho, que es intransferible, que es disponible, que puede ejercerlo si lo desea, o no.

Hay casos en que la discriminación da lugar a acciones públicas, es cierto, pero esto corresponde al ámbito del derecho penal.

Pero en lo que hace al derecho privado de cada uno, no puede la ley establecer un modo de obrar forzado. El derecho a la reparación, que es esencialmente privado y disponible, le sería impuesto al individuo como una decisión de carácter público, circunstancia en la cual su voluntad particular quedaría por completo excluida.

La persona es quien debe considerar si padece una discriminación, y aun cuando se considere afectada deberá ser ella quien decida si ejerce la acción para que cese la discriminación que sufre, porque el acto corresponde a la esfera del derecho privado.

Cuando debe ejercerse la acción pública, nos encontramos en el plano del derecho penal, lo

que no podemos es cambiar la naturaleza de la acción civil. Esto forma parte de una larga y vieja discusión que se plantea alrededor del Código Civil, cuando se habla del derecho al resarcimiento con motivo de los delitos de tipo criminal; el Código Civil establece con claridad que sólo puede otorgarse indemnización si el damnificado la pide, ya que se trata de una acción privada.

Cuando se reformó el Código Penal, en el artículo 29 se quiso establecer —siguiendo la doctrina de Enrico Ferri— que éste fuera un derecho público y que el juez debería obligatoriamente fijar la indemnización en la sentencia. Por suerte, el Senado de aquella época se equivocó al utilizar el verbo y en lugar de decir "deberá ordenar" estableció "podrá ordenar" la reparación. No pensaba en cambiar la naturaleza de la institución sino en el posible exceso de trabajo de los tribunales. Sin embargo, así se preservó la naturaleza privada del derecho de indemnización. El juez "podrá ordenar" la indemnización sólo si el damnificado lo pide, es decir, ejerce la acción civil de reparación del daño.

Aquí es como si se replantea ese caso. Cuando se dice que esto es de acción pública y que el derecho de resarcimiento es obligatorio para la víctima se desnaturaliza la institución del derecho privado. No obstante la buena intención con que esto se propone, no es del caso aceptarlo.

En cuanto a la vía de amparo para la protección de los derechos, pienso que esto es materia de regulación de las provincias y por eso no lo prevemos. Cada provincia en su código procesal tiene establecidas o establecerá las vías a través de las cuales dará protección a estos derechos.

Con referencia a qué indemnización puede ser fijada equitativamente por el juez, no es necesario decirlo de modo expreso. El Código Civil establece que cuando el juez no puede llegar a una determinación aritmética de la indemnización la fijará prudencialmente. Esto está en todas las reglas del Código Civil sobre reparación del daño. De manera que aunque el artículo 1.071 bis lo haya dicho, creo que no hace falta que lo digamos nosotros porque lo que fue superfluo una vez no hace falta que lo hagamos superfluo de nuevo.

Tal vez me he extendido un poco en mis comentarios. He expresado lo que acepto y lo que

no acepto de importantes propuestas del señor senador. Sólo quiero agregar que en el segundo párrafo, después de donde dice "actos u omisiones" debe incluirse "discriminatorios", a los efectos de que se entienda bien que no se trata de cualquier acto u omisión sino de los que sean discriminatorios y que estén dentro del acto de arbitrariedad a que se refiere la primera parte del artículo.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: como firmante del despacho de comisión que hoy tratamos voy a mantener la tesitura de su aprobación con dos cuestiones planteadas muy acertadamente por el señor senador por Jujuy. Por un lado, que esta ley sea considerada en forma autónoma, es decir que no se incluya este artículo 1º como un agregado del artículo 1.071 bis del Código Civil sino que simplemente sea tenido como incluido en esta ley en forma autónoma, pero como dijo el miembro informante, señor senador por la Capital, no por las razones que ha dado el señor senador por Jujuy, porque indudablemente dentro de este Código hay muchas disposiciones relativas también al Estado y no por eso dejan de pertenecer al ámbito de esa norma.

Además del caso que planteó el señor senador por la Capital, es decir el tema del dominio público, recuerdo por ejemplo el artículo 1.112 del Código Civil, que se refiere a los hechos cometidos por funcionarios. Estos hechos están regulados por dicho código, no obstante que lo relativo a los funcionarios podría ser entendido como una cuestión de derecho administrativo. De modo tal que está bien que lo saquemos del Código Civil pero por razones metodológicas que no hacen precisamente al tema de la distinción entre derecho público y privado.

También estoy de acuerdo con que se incluya lo relativo a las ideas políticas o gremiales para hacer más comprensible la norma.

En lo que hace al tema de la nulidad absoluta no estoy de acuerdo en que se lo incluya, pero aquí voy a diferir con los motivos dados por el señor senador por la Capital. El hecho de declarar de nulidad absoluta al acto discriminatorio va mucho más allá de lo que la norma debe pretender y en algunos casos puede tornar absolutamente peligrosa la disposición legal.

Cuando se está ante un acto discriminatorio indudablemente hay un afectado directo sin perjuicio de que la sociedad toda también pueda estarlo, pero la víctima directa es aquella que ha sufrido el acto discriminatorio. Yo pregunto hasta qué punto la ley puede imponer la nulidad de ese acto cuando el directamente afectado no tiene interés en plantearla. A veces el afectado por el acto puede no tener interés en plantearla por no querer que el *streptum forum* lo vaya a afectar; no quiere que trascienda; se ha sentido avergonzado por el hecho y no quiere que la trascendencia pública le haga más daño. Sin embargo, de acuerdo con esta norma no sólo se declara la nulidad del acto sino que se le da derecho a cualquier persona a plantearla. Inclusive, va más allá de lo que el Código Civil establece como consecuencia del acto nulo. Dicho cuerpo legal dice que el acto nulo puede ser planteado por cualquier persona con excepción de aquel que lo ha causado. Sin embargo, de esta norma surgiría que quien ha causado el acto nulo podría invocar su nulidad.

De tal modo que considero que si sancionáramos la nulidad absoluta estaríamos incursionando en un terreno un tanto peligroso que, desde luego, no puede ser admitido.

Por esos mismos motivos no podemos aceptar el agregado propuesto por el señor senador por Santiago del Estero en el sentido de que la nulidad absoluta sea además de pleno derecho. En principio, lo que él pretende decir con que sea de pleno derecho ya queda perfectamente establecido con señalar que el acto es nulo de nulidad absoluta, lo que significa que no produce efecto alguno y que también puede ser declarado de oficio por el juez. Lo de pleno derecho no es aplicable al caso de las nulidades; éstas pueden ser absolutas o relativas. Las absolutas pueden ser declaradas de oficio por el juez sin necesidad de que sean de pleno derecho.

Por los motivos expuestos y para simplificar el tema sostengo lo siguiente. En primer lugar es correcta la exclusión del artículo 1º del 1.071 bis del Código Civil; que debe quedar directamente como sanción de este proyecto. En segundo término, acepto que se agregue el tema de las ideas políticas y gremiales.

Con respecto a las cuestiones restantes comparto lo sostenido por el señor miembro informante de la comisión en el sentido de que el tema del procedimiento atañe a las provincias en virtud de lo dispuesto por el inciso 11

del artículo 67 de la Constitución Nacional, razón por la que no podemos establecerlo en esta norma.

En definitiva, sostengo que debe mantenerse el dictamen en la forma propuesta con las observaciones y modificaciones que hemos aceptado.

Sr. Presidente (Otero). — Como no hay número suficiente se llamará para votar.

—Así se hace.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Me referiré brevemente a los conceptos expresados por el señor senador por la Capital.

Desde luego que el concepto de igualdad, tal como lo señaló el doctor de la Rúa, está consagrado por la jurisprudencia que interpreta la Constitución Nacional, y es la igualdad en similares circunstancias y condiciones. Esto es elemental; y cuando resultare necesario interpretar un caso derivado de este proyecto dicho principio no sufrirá desde luego modificación alguna.

El motivo para no admitir la distinción entre actos y hechos no tiene validez jurídica porque se sabe que los actos son una forma o clase de hechos. Además, no tiene trascendencia, máxime cuando la propia redacción de la comisión expresa "...dejar sin efecto el acto discriminatorio..." Se refiere a actos y no a hechos y así lo dice también el artículo 953 del Código Civil.

Con respecto a que la víctima directa pueda no denunciar el acto y no autorizar la acción pública, ello deriva de la circunstancia de que en esta clase de episodios desencadenados por la discriminación racial, política, de nacionalidad, etcétera, la víctima puede ser a la vez víctima del miedo, porque el poder público puede ser tan potente en su discriminación que ese miedo haga que no pueda de ninguna manera atreverse a objetar el acto. Para ejemplificar este punto pongo el caso de un negro, judío o coreano que es víctima de un acto discriminatorio por aplicación torcida de una reglamentación a cargo de una autoridad pública y que, naturalmente, teme denunciar por miedo a las represalias. La historia universal de la persecución racial y religiosa indica que se ha preferido sufrir el tormento y hasta entregar la vida antes de intentar la propia defensa porque se temen las con-

secuencias que pueden derivarse para la familia o para las personas vinculadas con las víctimas del atropello.

Hay que tener en cuenta que esto deriva de la consideración que se ha tenido en la esfera internacional para la regulación de la no discriminación, al punto de que las precisiones en el delito de genocidio son tales que dan autorización para recurrir, si los países lo aceptan, a organismos jurisdiccionales internacionales.

Este es el motivo por el cual me parece que no se pierde nada si adoptamos el criterio que propongo, cubriéndose además una eventualidad si se mantiene la acción pública.

La alternativa de que pudiera ocasionarse la nulidad relacionada con el propio actor, con el que causó el acto, es demasiado hipotética porque siempre está suponiendo este proyecto de ley que hay quien, por una u otra vía, está ocasionando la discriminación de la que hace víctima al actor.

Por estas circunstancias me permito insistir en el texto. Además, no se ha hecho referencia a los párrafos que dicen que no se considerará discriminación cuando una ley exija como requisito determinadas condiciones para acceder a un empleo público. Me parece que esto es indispensable ponerlo así como también lo referido a temas de defensa y seguridad de la Nación, porque cubren situaciones que, de lo contrario, quedarán involucradas en el espíritu general de la norma.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Omití referirme a ese punto y la razón de ello está dada en que va de suyo lo que señala el señor senador. Es decir, eso está contemplado en el concepto general del proyecto de ley porque, de lo contrario, no sería un acto violatorio del principio de igualdad. En cambio, si se incorporase el párrafo que se propone, podrían estar convalidándose otros casos y situaciones que, al no estar contemplados expresamente en las excepciones, podrían considerarse que están absolutamente excluidos.

Por estas razones consideramos que no es conveniente hacer ninguna clase de ejemplificaciones en materia de excepciones porque, en realidad, no lo son ya que se trata de actos no arbitrarios ni discriminatorios pues no violan el principio de igualdad ante la ley.

Sr. Presidente (Otero). — Como no hay número en el recinto, se continuará llamando.

—Así se hace.

Sr. de la Rúa. — Encontrándose la señora senadora por Tucumán en el salón comedor, sugiero que se la invite a concurrir al recinto.

Sr. Presidente (Otero). — Igual no habría quórum...

Sr. Menem. — Solicito que se informe si hay número suficiente en la casa.

Sr. Nápoli. — Hay veinticuatro señores senadores en la casa.

Sr. Presidente (Otero). — Si es que alguien no ha salido por la puerta que corresponde a la Cámara de Diputados, lo que suele suceder.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: que se pase lista. De ese modo vamos a saber quién falta, si no viene a dar el presente.

Es la segunda vez en el tratamiento de este proyecto que el Senado se queda sin quórum.

Sr. Nápoli. — ¿Cuántos senadores hay en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Otero). — Aparentemente veinticuatro.

Sr. de la Rúa. — Así veremos quién es el número veinticuatro.

Sr. Martiarena. — Me opongo porque va a parecer una pesquisa, señor presidente. A lo mejor, se ha ido por Diputados.

Sr. Bravo Herrera. — O por el ascensor de empleados.

Sr. Martiarena. — Mañana seguimos. Mañana es día de tablas.

Sr. Presidente (Otero). — Pero tenemos que considerar un tema muy importante, la ley de defensa, que va a insumir muchísimas horas y probablemente no terminemos.

Sr. Bravo Herrera. — Seguimos pasado mañana, si es necesario.

Sr. de la Rúa. — No es pesquisa, señor presidente. Que se pase lista.

Sr. Romero Feris. — Estoy de acuerdo con que se pase lista.

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se para lista.

— Así se hace.

— Están presentes los señores señadores Aguirre Lamati, Bonítez, Berlinguer, Bisco Herrera, Conchiza, de la Hita, Fabini, Gass, Gil, Guidicich de Carrán, Mallarín de Torres, Martiarena, Mazzaroni, Menem, Napoli, Otero, Rivas, Roman, Romero Feris, Sánchez, Solari Arigoyen, Tente y Ulla.

Sr. Secretario (Macería). — Hay 23 señores senadores presentes.

Sr. Presidente (Otero). — Recordamos que mañana es día de tablas. Se procederá a llamar a las 17.

Sr. Romero Feris. — ¿No se puede sesionar por la mañana?

Sr. Presidente (Otero). — No lo hemos votado. Queda levantada la sesión.

— Es la 0 y 4 del jueves 7 de abril.

MARIO A. DALLASTRO,
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

17

APENDICE

I

SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1

Invitación al señor ministro de Obras y Servicios Públicos

— El texto de la resolución aprobada es el siguiente:

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Celebrar sesión pública especial el próximo jueves 14 del corriente, a las 10 horas, con el objeto de recibir la información que el señor ministro de Obras y Servicios Públicos, ofrece brindar a esta Honorable Cámara, por nota de fecha 22 de marzo de 1988, sobre política de privatización del rubro de su cargo y requerido informe sobre el plan de emergencia por inundaciones.

2

Repudio de la campaña de intimidación pública

— El texto de la declaración aprobada es el siguiente:

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio frente a la campaña de intimidación pública desplegada por quienes pretenden retrotraer a la República a un pasado cprobioso demostrando, una vez más, su desprecio por la voluntad del pueblo argentino de vivir en paz y democracia y solicita al Poder Ejecutivo se extremen las medidas para esclarecer la autoría de esos hechos censurables.

3

Asesoramiento a la Comisión de Legislación General

— El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 2922.

4

Invitación al señor ministro de Educación y Justicia

— El texto de la resolución aprobada es el que figura en la página 2935.

II

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BRAYO

Vuelven los cinturones de castidad

Celosos maridos italianos han reimplantado el uso de los retrógrados cinturones de castidad para garantizar la fidelidad de sus esposas. Angelo Camerino Da Greccio, conocido artesano romano, ha realizado siete de ellos a medida, al estilo medieval, con candados, al precio de dos millones de liras (mil setecientos dólares) cada uno. Exposición sobre los tópicos feministas.

Roma (Bravo). — Los "feministas" italianos están redescubriendo un retrógrado método de siglos de antigüedad que asegura que las esposas no cometerán infidelidades: los cinturones de castidad de estilo medieval, hechos a medida.

El cinturón artesano romano Angelo Camerino Da Greccio dice que fabricó siete cinturones de castidad de acero, completos con candados, en los últimos meses para cumplir con los pedidos de maridos celosos en el sur de Italia.